

VIOLENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA: EL IMPACTO DEL CRIMEN EN LA LEGITIMIDAD DE LOS REGÍMENES DE POSGUERRA

*Violence and democratization in Central America:
the impact of crime in the legitimacy of post-war regimes*

José Miguel CRUZ

Instituto Universitario de Opinión Pública/UCA

✉ *mcruz@iudop.uca.edu.sv*

BIBLID [1130-2887 (2003) 35, 19-59]

Fecha de recepción: septiembre del 2003

Fecha de aceptación y versión final: noviembre del 2003

RESUMEN: El propósito fundamental del artículo es mostrar que los elevados niveles de la violencia común y de la delincuencia que afectan en la actualidad a los países latinoamericanos, especialmente a los países centroamericanos de posguerra, constituye un obstáculo y una amenaza para los procesos de democratización. Esto porque la violencia criminal erosiona el apoyo ciudadano a los regímenes surgidos de las transiciones políticas y resta legitimidad al sistema político. El artículo parte de los resultados de una serie de encuestas llevadas a cabo con más de 6.700 ciudadanos en países centroamericanos en situación de posguerra (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) en 1999 y se analiza la vinculación entre los niveles de victimización y de percepción de inseguridad pública con el nivel de apoyo político para el sistema.

Palabras clave: democratización, violencia común, inseguridad, legitimidad, cultura política, apoyo político.

ABSTRACT: The main purpose of this article is to show that the high levels of common violence and crime, which currently affect Latin American countries, especially post-war Central American ones, represent a threat and obstacle to democratization processes. This is so, because common violence erodes the citizens' support to the regimes emerged from the political transitions and deteriorates the legitimacy of the political system. The article is based on the results of a series of surveys conducted with more than 6.700 citizens who live in post-war Central American countries (Guatemala, El Salvador and Nicaragua) during 1999, as the link between victimization levels, perception of public insecurity and the level of political support for the system is analyzed.

Key words: democratization, common violence, insecurity, legitimacy, political culture, political support.

I. INTRODUCCIÓN*

A inicios del siglo XXI, la violencia se ha convertido en un gran problema social a nivel mundial. De acuerdo con el *Reporte Mundial de Violencia y Salud*, publicado por la Organización Mundial de la Salud (Krug *et al.*, 2002), aproximadamente 1,6 millones de personas pierden sus vidas cada año debido a la violencia: la violencia es una de las causas más frecuentes de mortalidad en personas entre 15 y 44 años de edad. Con la excepción del África Subsahariana, la región de América Latina y el Caribe se destaca como una de las más violentas en el mundo. Pero mientras África tiene que lidiar con la violencia producida por guerras civiles y conflictos étnicos, las principales fuentes de violencia de América Latina son la violencia social y la criminalidad.

La ola de criminalidad y violencia social que invadió a América Latina en las décadas de 1980 y 1990 coincidió con las transiciones a sistemas democráticos, o apareció luego del fin de las guerras civiles, las cuales lograron ampliar la esfera política. De forma paradójica, en el caso de Centroamérica, el crimen y la inseguridad pública surgieron cuando las sociedades abandonaron los gobiernos autoritarios y se convirtieron en democracias (Call, 1999). Más aún, dentro de los países de América Latina, la subregión de Centroamérica, particularmente Guatemala, El Salvador y Honduras, se destaca como la más violenta; mientras que Nicaragua presenta niveles moderados de crímenes violentos y Costa Rica se constituye en la excepción de la zona, junto con su democracia récord establecida hace más de cincuenta años. En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, el crimen violento ha sucedido a la guerra civil y a la violencia política, y a pesar de los nuevos regímenes con libertades civiles y competencia electoral, estos países se han convertido en las sociedades más inseguras del hemisferio occidental.

Con estos antecedentes, es importante cuestionarse hasta qué punto los niveles de violencia e inseguridad pública pueden representar amenazas a los procesos de democratización que actualmente caracterizan a la región. La suposición común sobre un cambio de régimen es que el desempeño económico juega un rol importante en la estabilidad o en la ruptura de los regímenes políticos, al reforzar o erosionar la legitimidad de los mismos (Lipset, 1994) o al establecer las condiciones para un intercambio fluido entre los actores políticos (Przeworski *et al.*, 1996); sin embargo, hay muy pocos estudios que vinculan al crimen y a la inseguridad pública con la democratización. Más aún, la tendencia renovada de estudiar el papel de la cultura política y la democracia no parece haber considerado lo suficiente el efecto de la inseguridad pública en las actitudes y normas que apoyan las democracias y los procesos de democratización. En este sentido, los países de Centroamérica en situación de posguerra (Guatemala, El Salvador

* Agradezco los comentarios y sugerencias de Laurence Whitehead, Stephanie Kitchen, Proochista Ariana y John Bayley. Traducción de Susan Greenbaltt. La versión en castellano de este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Programa Sociedad sin Violencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo El Salvador. Mis sinceros agradecimientos a Marcela Smutt, a los miembros de la mesa directiva del programa, Héctor Dada, Mauricio Gaborit, Cecilia Gallardo de Cano y Salvador Samayoa y a los evaluadores anónimos de la Revista *América Latina Hoy*.

y Nicaragua), constituyen un caso adecuado para estudiar cómo los esfuerzos para construir un régimen democrático y el apoyo político para su supervivencia pueden ser erosionados por el efecto negativo de las elevadas tasas de crimen y de violencia común.

Este trabajo tiene como objetivo estudiar el impacto del crimen y la inseguridad en las actitudes y valores (cultura política) que apoyan la gobernabilidad democrática, y particularmente la legitimidad, en los países centroamericanos en situación de posguerra. De esta manera, pretende abordar la relación entre el crimen violento y el apoyo al sistema por parte de ciudadanos centroamericanos, utilizando datos de nivel micro, extraídos de encuestas de opinión pública realizadas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua en el año 1999¹. La propuesta básica de esta investigación es que el crimen y la inseguridad reducen el apoyo de la población a los sistemas políticos establecidos en la posguerra.

II. EL CAMBIO DE RÉGIMEN EN CENTROAMÉRICA: LA TRIPLE TRANSICIÓN FUNDACIONAL

Por muchas razones, Centroamérica ha sido una región especial dentro de América Latina. Aunque es posible identificar un proceso común general, los hechos muestran que América Central ha tenido una historia sociopolítica muy particular. Tal vez, la característica más determinante de la historia reciente de la región sean los amplios procesos de guerra y paz que tres de los cinco países del área han experimentado en los últimos treinta años. Las largas guerras de Guatemala y El Salvador y los conflictos revolucionarios y contrarrevolucionarios de Nicaragua, convirtieron a Centroamérica en una de las regiones más inestables del continente durante la década de 1970 y 1980. A diferencia de otros países latinoamericanos que no tuvieron que enfrentar guerras civiles entre dos grandes fuerzas políticas y militares, la mayor parte de la región centroamericana estuvo marcada por este tipo de guerras.

Sin contar a Costa Rica, que ha sido, en muchos aspectos, la excepción de la región, Centroamérica representa una de las zonas más subdesarrolladas del continente. La pobreza, la inequidad, la violencia y los regímenes autoritarios vigentes hasta principios de los noventa, han caracterizado a esta región. Los cuatro países poseen más del 45% de su población viviendo bajo la línea de pobreza. La incidencia de la pobreza y los niveles de desigualdad en Centroamérica son mayores que el promedio de América Latina, considerada como la región más desigual del mundo (Corbacho y Davoodi, 2002).

Guatemala, El Salvador y Nicaragua fueron regidos por gobiernos autoritarios durante la mayor parte del siglo XX. A excepción del proceso de apertura en Guatemala en la década de 1940, que terminó con el golpe de 1954, estas sociedades no tuvieron la oportunidad de experimentar regímenes democráticos o semidemocráticos, contrario

1. Estas encuestas se aplicaron como parte del proyecto Latinoamericano de Opinión Pública de la Universidad de Pittsburg. Agradezco especialmente a Mitchell Seligson, director del proyecto, por permitirme usar las bases de datos para este proyecto.

a lo que sucedía en el resto de Latinoamérica. Diferentes condiciones y procesos llevaron a la escalada de conflictos armados y guerras internas entre las guerrillas de izquierda y los regímenes militares en Guatemala y en El Salvador; mientras que en Nicaragua, después de la caída de la dictadura de Somoza y el establecimiento de la Revolución Sandinista, se estableció una guerra contrarrevolucionaria con el fin de derrotar al régimen sandinista. Las transiciones políticas y el establecimiento de las democracias formales llegaron con la finalización de las guerras, la firma de los pactos de paz y la celebración relativamente justa y libre, de elecciones².

Aunque cada país tuvo, entre 1980 y 1990, su propia ruta hacia la transición política, todos ellos comparten por lo menos tres características que vale la pena considerar para efectos del análisis político. Como asegura Córdova Macías para el caso de El Salvador (1996), es posible decir que las transiciones políticas en los países de Centroamérica en situación de posguerra se presentaron en tres dimensiones. Primero, la transición de la guerra a la paz; segundo, la transición de gobiernos militares a civiles; y tercero, una transición más amplia de regímenes autoritarios a regímenes democráticos.

II.1. De la guerra a la paz

Probablemente, la característica más notoria de las transiciones políticas centroamericanas es el paso de una guerra civil más o menos generalizada a la paz política. En los tres casos, es posible concluir que las transiciones únicamente se completaron cuando se terminaron los conflictos armados. En el caso de Guatemala y El Salvador, el logro de la paz está intrínsecamente vinculado con los procesos de reformas incluidos en los tratados de paz; mientras que en Nicaragua, el Tratado de Sapoá, firmado en 1988, estableció las condiciones que llevaron a las elecciones definitivas del año 1990 (Torres-Rivas, 2001a). Ningún otro país de América Latina experimentó una transición política en la dinámica de una negociación para la paz.

Las guerras establecieron las condiciones bajo las cuales las élites políticas negociaron las transiciones y las guerras influyeron en la calidad y en la profundidad de los Acuerdos de Paz. Por lo tanto, cada transición sólo puede ser explicada por medio de una evaluación de la guerra que la precedió; y en el caso de América Central, los conflictos eran bastante diferentes. El conflicto guatemalteco es visto generalmente como el más largo y el menos equilibrado de la región; el salvadoreño se destaca como la guerra más intensa y abarcadora de la región; mientras que el conflicto nicaraguense fue el que más apoyo recibió por parte del extranjero.

2. Ha habido mucha discusión sobre cuándo iniciaron y finalizaron las transiciones políticas en cada país de Centroamérica. El objetivo de este trabajo no es abordar esta discusión, aunque por motivos prácticos, utilizaré la firma de los Acuerdos de Paz en Guatemala y El Salvador y las elecciones de Nicaragua de 1990, como los eventos de resolución de estas transiciones.

En el caso de Guatemala, Torres-Rivas ha argumentado que no se dio una verdadera guerra civil sino una guerra invasiva del Estado en contra de la sociedad (2001b), la cual tuvo dos momentos diferentes. Sus orígenes datan de la década de 1960 cuando surgió un grupo guerrillero formado por estudiantes y trabajadores. Los insurgentes fueron prácticamente vencidos por el ejército guatemalteco al final de la década. Este levantamiento y la doctrina anticomunista que dominaba los Estados americanos reforzaron un tipo de plataforma contrainsurgente en el Estado guatemalteco, que reprimió y exterminó posteriormente cualquier tipo de oposición política. Hacia finales de la década de 1970, se dio otro levantamiento que también fue derrotado en 1983 por una gran campaña militar dirigida en contra de las comunidades indígenas y rurales (Schirmer, 1998). Aunque algunas de las fuerzas de la guerrilla lograron sobrevivir y formar la URNG (Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), éstas no llegaron a representar un desafío real para las fuerzas militares, de tal manera que los Acuerdos de Paz se firmaron sólo cuando las partes estaban completamente convencidas de la futilidad de prolongar la guerra (Torres-Rivas, 2001b). Como resultado, el tratado de paz no alteró dramáticamente el poder y el papel que jugaban tanto el ejército guatemalteco como la oligarquía. Aunque estas élites tuvieron que entregar algunas instituciones del sistema de seguridad, permanecieron básicamente intocables e impunes por los crímenes cometidos antes y después de los Acuerdos de Paz (Sieder, 2001).

En El Salvador, la resolución de la guerra se ha descrito frecuentemente como un «empate» político y militar. La guerra civil salvadoreña se inició en los primeros años de la década de 1980, luego de una escalada de tensiones políticas causada por fraudes electorales recurrentes que impedían la alternabilidad política. Luego del frustrado golpe de Estado de octubre de 1979, la represión estatal empujó a la oposición política moderada y al Partido Comunista a formar una alianza con los grupos guerrilleros, los cuales se integraron en el FMLN y lanzaron la llamada ofensiva final que convirtió a la conflictividad política en guerra. Ésta evolucionó como un conflicto armado formal, localizado principalmente en las zonas rurales del país, con operaciones esporádicas en las ciudades durante los primeros años las cuales fueron creciendo al finalizar la década. Aunque los primeros esfuerzos públicos para lograr un final negociado a la guerra comenzaron en 1984, ninguna de las partes estaba interesada en una solución pacífica, ya que estaban convencidas de las posibilidades que tenían de ganar la guerra militarmente (Villalobos, 1989). La ofensiva guerrillera de 1989 cambió la percepción sobre la posibilidad de una victoria militar. Ambas partes se dieron cuenta de que después de 10 años de guerra, una victoria militar era ilusoria. El contexto y la presión internacionales completaron las condiciones para la firma de los Acuerdos de Chapultepec en 1992. Dadas las condiciones de este virtual «empate», los Acuerdos de Paz salvadoreños fueron los más ambiciosos en términos de reformar al Estado y establecer las condiciones para un gobierno democrático (Karl, 1995).

La guerra nicaragüense fue el resultado de un esfuerzo contrarrevolucionario impulsado por los Estados Unidos. Luego de la caída de la dictadura de Somoza, y con la toma del poder de los sandinistas, Estados Unidos apoyó la organización de la llamada Resistencia Nacional –que constituía una fuerza integrada por la anterior Guardia

Nacional, misquitos (población indígena de la Costa Atlántica) y campesinos—la cual adquirió gran importancia a mediados de la década de 1980. Esta fuerza, conjuntamente con el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, logró reducir la capacidad del régimen sandinista para administrar los problemas del gobierno. La guerra se concentró prácticamente en las zonas rurales y nunca alcanzó las ciudades, pero tuvo un impacto significativo tanto en la economía como en la sociedad nicaragüense, ya que tuvo un costo humano de aproximadamente 50.000 vidas (Torres-Rivas, 2001a; 2001b). Así, el régimen sandinista fue forzado a negociar la paz en 1989, aunque ya había ganado la guerra de forma militar para fines de 1988. Esto llevó a la celebración de elecciones en 1990, las cuales fueron ganadas por la oposición, liderada por Violeta Chamorro. Posteriormente, se dio un largo proceso de pacificación, que incluso superó la calendarización de la transición.

II.2. Del control militar al control civil

Debido a las guerras internas o al carácter autoritario de los regímenes centroamericanos, el ejército jugó un papel central en el control del poder en estos países. Así, las transiciones políticas se orientaron a expulsar a los militares del poder o del gobierno, ya sea por medio de la finalización de la guerra o por la remoción de los mismos de los sistemas internos de seguridad y de la esfera política.

En Guatemala y El Salvador, donde el poder estaba directamente controlado por los militares antes de la década de 1980, las guerras le proporcionaron a los ejércitos la suficiente autonomía y supremacía sobre los civiles, inclusive cuando estas sociedades comenzaron a tener elecciones en la década de 1980, estando en situación de conflicto armado. Aunque ambos países tenían presidentes civiles (desde 1982 en El Salvador y 1986 en Guatemala), el aparato militar tenía una gran influencia en el ámbito político y controlaba los sistemas internos de seguridad. Esto se manifestaba en dos niveles: primero, en el control directo de las instituciones coercitivas —la policía y las oficinas de inteligencia—; y segundo, en el desarrollo de amplias redes de colaboradores civiles, que ayudaban no sólo como fuentes de contrainteligencia, sino también como agentes de represión diaria y de violencia. En El Salvador estas redes eran conocidas como «defensas civiles». Las raíces de esta red se remontaban a comienzos del siglo XX y durante la guerra civil, se llegaron a reclutar hasta cerca de 300.000 miembros, principalmente de las zonas rurales (Stanley, 1996). En Guatemala, la creación de las Patrullas de Auto-defensa Civiles (PAC) en 1982 tuvo una enorme influencia en el curso de la guerra y también en la dinámica social comunitaria. Con casi un millón de miembros, las PACs ocupaban casi al 20% de la población adulta guatemalteca para realizar tareas de guerra sucia y de represión (Torres-Rivas, 2001b).

En ambos países, el ejército, al ser retirado del ámbito político por medio de los Acuerdos de Paz, tuvo que entregar las instituciones de seguridad interna y disolver las redes de colaboradores civiles (Sieder, 2001). En este aspecto, el logro de El Salvador fue superior al de Guatemala y al de otros países que experimentaban reformas de

seguridad en el contexto de una transición (Call, 2002). En todo caso, ambos países cuentan ahora con una seguridad interna liderada por civiles y los militares ostentan un poder mucho menor al que tenían antes de los Acuerdos de Paz.

En Nicaragua, los procesos de desmilitarización y de reducción del Ejército Popular Sandinista (EPS) no fueron resultado del Tratado de Sapoa sino consecuencia directa de los acuerdos entre la presidenta Violeta Chamorro y los sandinistas. El sistema de seguridad interna fue desmantelado por medio de los cierres de las oficinas de inteligencia del Ministerio del Interior, el desmontaje de las Milicias Populares Sandinistas, y la reducción de los EPS y la Policía Sandinista; esta última fue renombrada e integrada por antiguos combatientes de la Contra. A diferencia de lo ocurrido en Guatemala y El Salvador, y aunque los sandinistas desarrollaron con las Milicias Populares cierto tipo de redes de defensa civil, éstas nunca tuvieron el perfil de represión y el carácter violento de sus contrapartes en los países anteriormente mencionados y la «violación sistemática de los derechos humanos nunca fue una característica del ejército nicaragüense después de 1979» (Dunkerley y Sieder, 1996: 70).

Después de las transiciones, más de 450.000 personas fueron desmovilizadas, 90% de las cuales provenían de las fuerzas de gobierno. Las transiciones políticas en Centroamérica no sólo le retiraron al ejército el control directo del poder, sino que también crearon una amplia legión de desempleados con habilidades militares en un contexto de paz. Esto tendría consecuencias importantes para las sociedades centroamericanas de la posguerra.

II.3. Del régimen autoritario al democrático

El fin de las guerras, las firmas de los Acuerdos de Paz y el retiro formal del ejército de los aparatos de seguridad construyeron el camino para la creación de instituciones democráticas y el establecimiento de regímenes civiles realmente democráticos. A pesar que en la década de 1980 se sostenían elecciones periódicas en los países del área, los conflictos imperantes impedían la expresión de un voto abierto, competitivo y justo; además, todavía existían sectores a los cuales no se les permitía participar en dichas elecciones (Baloyra-Herp, 1995). Después de los Acuerdos de Paz, se le permitió a cada sector político participar políticamente y postularse y el ejército dejó de ser interventor del proceso político.

Ha habido mucho debate entre los investigadores sobre el tipo y la calidad de las nuevas democracias centroamericanas (Karl, 1995; Vilas, 1998), pero en un punto no parece haber mayor desacuerdo: el hecho que las transiciones de la posguerra centroamericana condujeron a democracias nuevas. Esto tiene implicaciones importantes para el alcance de este trabajo.

En Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las transiciones a la democracia llevaron a la creación de los primeros regímenes democráticos en la historia de estos países (Sieder, 2001). Esto es lo que Garretón y Newman (2001) y Torres-Rivas (2001b) han llamado «democracias fundacionales». Las transiciones políticas en Centroamérica

requerían el reemplazo de los regímenes oligárquicos relativamente permanentes que prevalecieron desde finales del siglo XIX hasta la década de 1970, por los regímenes prodemocráticos y electorales que emergieron durante el período de las guerras civiles. De tal manera que la experiencia de la democracia, o por lo menos, de un régimen no autoritario, era relativamente nueva en estas sociedades. Mientras que en el Cono Sur, las transiciones a la democracia implicaban cierta restauración de las viejas instituciones y de las reglas del juego político; en Centroamérica éstas eran casi inexistentes. Los nicaragüenses, guatemaltecos y salvadoreños no tenían experiencia con instituciones democráticas, por lo que han tenido que aprender desde cero. De hecho, estas condiciones representaron retos adicionales para los pequeños y pobres países centroamericanos. Las instituciones necesitaban ser creadas, y eso requería, además de estructuras, hábitos, habilidades y procedimientos que las hicieran funcionar; en otras palabras, un tipo de cultura política institucional. Esto era una tarea difícil; pero era aún más difícil considerando que las instituciones que tenían que ser reformadas o creadas eran las mismas que lidiaban con el orden y la seguridad y que, por tanto, ostentaban el recurso del uso de la fuerza.

Distintas evaluaciones catalogan la transición salvadoreña como la más exitosa de las tres transiciones. De manera efectiva, la transición excluyó al ejército del ejercicio de la política (Call, 2002); reformó casi completamente sus instituciones de seguridad y las colocó bajo mando civil; frenó la violencia política y estableció las reglas para elecciones relativamente abiertas, justas y competitivas. Sin embargo, fuertes limitaciones en torno al reforzamiento institucional han arrojado dudas acerca de la firmeza de la transición (Call, 2002). Los resultados de la transición nicaragüense, por su parte, tardaron más en observarse. Aunque también separaron al ejército del campo político; desarmaron el aparato de seguridad y sostuvieron las elecciones competitivas más participativas de la región, los nicaragüenses tuvieron que lidiar con una violencia concentrada en algunas partes del país debido a la imposibilidad de otorgar condiciones favorables a los antiguos combatientes. Los incidentes armados no son ahora tanto problema como lo fueron en el pasado, pero siguen siendo fuente de inestabilidad. El caso menos promisorio ha sido Guatemala, país en el cual el ejército, a pesar de los Acuerdos de Paz y la transformación civil de los aparatos de seguridad, continúa ejerciendo una cantidad significativa de poder, la cual es utilizada para supervisar las instituciones civiles y para moldear la política y la dinámica social en el nivel local, dentro de comunidades rurales e indígenas (Schirmer, 1998; Sieder, 2001).

Así, los procesos de democratización que surgieron de las transiciones son significativamente frágiles. La evaluación de Karl de las nuevas democracias en Centroamérica asegura que la posibilidad de que las frágiles estructuras democráticas de la región se expandan, se consoliden o sean capaces de generar resultados para la población es también baja. Varias evaluaciones de las nuevas democracias centroamericanas han resaltado el problema del desempeño de estos regímenes (Cardenal y Martí i Puig, 1998). De acuerdo a una de estas evaluaciones, se comprueba que el desempeño de los regímenes democráticos apenas ha sido positivo en algunos aspectos y claramente negativo en otros (González, 1998). Se han identificado dos áreas para este problema de desempeño.

Primero, la incapacidad de proveer orden y seguridad para los ciudadanos y, segundo, el rendimiento económico, que no ha logrado mejorar el bienestar de la población. La primera es el eje central de este trabajo, en el cual sostengo que los problemas de orden y de seguridad generados por la violencia de posguerra constituyen un obstáculo en el proceso de democratización en las sociedades postransicionales de Centroamérica, en tanto que debilitan la legitimidad de los nuevos regímenes.

III. VIOLENCIA EN CENTROAMÉRICA: DE LA VIOLENCIA POLÍTICA A LA VIOLENCIA SOCIAL

Con la excepción de Colombia, América Latina se encuentra actualmente libre de guerras civiles y de violencia política a gran escala. Las dictaduras en el Cono Sur y las guerras internas de América Central finalizaron entre la década de 1980 y 1990; sin embargo, muchos estudios y agencias internacionales consideran que América Latina es la región más violenta en el mundo en cuanto a crímenes violentos y a violencia común de carácter individual (Buvinic *et al.*, 1999)³ y, por lo tanto, a pesar de la violencia política y los conflictos étnicos que prevalecen en los países de África al sur del Sahara, Latinoamérica se destaca como la región más insegura de todo el mundo.

La violencia en Latinoamérica difiere sustancialmente entre y dentro de los países. Por muchos años, Colombia ha sido considerado como el país más violento de la región, con tasas de homicidios superiores a las 80 muertes por 100.000 habitantes, mientras que Chile y Uruguay tienen tasas inferiores a 5 muertes por 100.000 personas (De Mesquita Neto, 2002). Con el fin de las dictaduras y las guerras civiles, los países latinoamericanos no sólo «descubrieron» nuevas formas de violencia, sino que también sus instituciones comenzaron a desarrollar sistemas de registro que revelaron la magnitud real del problema de violencia.

Algunos países comenzaron a ocupar puestos altos en las estadísticas regionales de violencia y crimen. El Salvador, Guatemala y Honduras publicaron información que los ubicó en los mismos niveles que Colombia y algunas ciudades de Brasil. Un estudio apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de mediados de los noventa encontró que El Salvador había tenido tasas de homicidio superiores a las 100 muertes por 100.000 habitantes entre los años 1994 y 1997 (Cruz y González, 1997). Otra publicación del Banco reportó que en los años siguientes a los Acuerdos de Paz, Guatemala alcanzó tasas de casi 150 asesinatos violentos por 100.000 habitantes (Buvinic *et al.*, 1999)⁴. Un análisis de la victimización del crimen en América Latina, basado en datos de la encuesta Latinobarómetro, reveló que casi el 50% de las viviendas en Guatemala,

3. La violencia individual se utiliza como lo opuesto de la violencia colectiva, generalmente implícita en los conflictos políticos y sociales. Esta clasificación ha sido propuesta por la Organización Mundial de la Salud. KRUG *et al.* (2002).

4. Aunque estudios más recientes muestran que los datos en El Salvador y Guatemala fueron sobreestimados debido a problemas en las estadísticas oficiales, investigaciones posteriores confirmaron que ambos países, conjuntamente con Honduras, se mantuvieron en el grupo de los países con más violencia, tomando como medida las tasas de homicidios. CRUZ *et al.* (2000); CIEN (2002).

El Salvador y Venezuela habían sido víctimas de algún crimen violento en el período de un año (Gaviria y Pagés, 1999). La misma encuesta mostró que casi todos los países de América Latina tenían tasas superiores a un 30% de victimización de viviendas.

CUADRO I
 VICTIMIZACIÓN Y TASAS DE HOMICIDIOS EN AMÉRICA LATINA EN LA DÉCADA DE 1990*

País	Victimización (% de hogares)	Tasas de homicidios (por 100.000 habitantes)
Argentina	38	4,8
Bolivia	34	Nd
Brasil	38	23,3
Chile	31	3,0
Colombia	37	89,5
Costa Rica	37	5,6
Ecuador	42	15,3
El Salvador	47	41,3
Guatemala	55	75,3
Honduras	37	45,0
México	43	17,8
Nicaragua	37	18,3
Panamá	28	10,9
Paraguay	33	4,0
Perú	38	11,5
Uruguay	25	4,4
Venezuela	45	16,0

* Las tasas de victimización son de Gaviria y Pagés. Las tasas de homicidios han sido tomadas de las fuentes más recientes y confiables posibles, especialmente en el caso de los países de Centroamérica. Fuente: GAVIRIA y PAGÉS (1999); BUVINIC *et al.* (1999); DE MESQUITA NETO (2002); CIEN (2002); PNUD (2001); KRUG *et al.* (2002).

Por lo tanto, no sería incorrecto decir que, debido al crimen, América Latina constituye actualmente una de las regiones más inseguras del mundo, con los países centroamericanos encabezando la lista. Guatemala, El Salvador y Honduras tienen niveles superiores al promedio regional, mientras que Nicaragua se sitúa cerca de la media. Sólo Costa Rica se mantiene como la excepción de la región. El punto es que la violencia y la crisis social no son desconocidas en esos países centroamericanos afectados por el crimen en la década de 1990. Como hemos visto en la sección anterior, durante el siglo XX, las sociedades centroamericanas habían sido gobernadas por regímenes militares o autoritarios. Estos regímenes utilizaban la violencia para

neutralizar y controlar la oposición política, y así, garantizar su permanencia y legitimidad (Torres-Rivas, 2001b). Sin embargo, después de las guerras, la violencia continuó moldeando la vida de los centroamericanos, especialmente la vida de aquellos que residen en Guatemala y El Salvador. Las encuestas de opinión pública demuestran que, en el momento en que surgieron los regímenes democráticos, se dio un aumento en la preocupación de la población por las nuevas expresiones de violencia.

Las manifestaciones de violencia y las percepciones de la misma no son iguales en estos tres países centroamericanos. Tal vez la diferencia más importante es que Guatemala y El Salvador presentan mucho más crimen y violencia que Nicaragua. No obstante, estas diferencias representan estadísticas simples que miden los niveles de criminalidad, pero la violencia también se expresa de diferentes maneras. Con el objeto de comprender el impacto del crimen violento en el apoyo político a los nuevos regímenes, los siguientes párrafos resumen algunas de las similitudes y diferencias de la violencia en los países centroamericanos en situación de posguerra.

La similitud más destacada entre estas tres sociedades, tal vez sea que todas han experimentado un aumento en sus niveles de crimen y violencia social, aunque en dos de ellos esta alza es seguida de una reducción. Todos los indicadores de victimización coinciden en mostrar un alza de las tasas de violencia en los años posteriores a las transiciones. En Guatemala, alcanzaron un nivel de casi 70 muertes por 100.000 habitantes en 1997, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz (De León *et al.*, 1999). En El Salvador, de acuerdo a las fuentes disponibles, en 1991, un año antes de la finalización del conflicto armado, la tasa de homicidios era de 43,5 de 100.000 (De Mesquita, 2002); pero en 1994, el siguiente año en el que este dato se encuentra disponible, las cifras alcanzaron valores superiores a las 100 muertes por 100.000 habitantes y comenzaron a declinar hasta 1998. Estos datos colocaron a El Salvador como uno de los países en posguerra más violentos del mundo (Call, 1999). Aunque Nicaragua también exhibió alzas en los homicidios en los años posteriores a la guerra, los cambios en las tendencias no fueron tan marcados como en otros países. De hecho, como se mencionó anteriormente, Nicaragua experimentó los menores niveles de crímenes violentos en comparación con sus vecinos del norte. Después de la transición a un régimen democrático es posible notar un ligero incremento en los homicidios entre los años 1991 y 1993, que hizo llegar a Nicaragua a una tasa de 20 muertes por cada 100.000 habitantes, pero este incremento fue rápidamente sustituido por una constante reducción hasta el final de la década.

Todo esto lleva a la identificación de una segunda similitud entre estos tres países de posguerra, la cual tiene que ver con las percepciones sobre el crimen y no sólo con los fenómenos reales. Como veremos posteriormente, esta faceta del problema de seguridad pública tiene particular importancia respecto al tema de gobernabilidad en sociedades democráticas. Además del alza en el crimen y la delincuencia, las transiciones políticas también fueron seguidas de un aumento en el temor público y en la sensación de inseguridad debido a la difusión de la violencia. La preocupación pública se concentró, después de las guerras y de los conflictos armados, en la inseguridad pública. En Guatemala, un año después de la firma de los Acuerdos de Paz en 1996, el 20% de

los guatemaltecos clasificaban la delincuencia como su principal preocupación; tres años después, en marzo de 1998, el porcentaje de guatemaltecos que se referían a los problemas de violencia era del 46% (CIEN, 2002), mucho más alto que los porcentajes asignados a otros problemas. En El Salvador, la variación es aún más marcada, al igual que los cambios drásticos en las tasas de criminalidad. En 1990, ninguna de las encuestas de opinión pública reflejaba que los salvadoreños estaban preocupados por la delincuencia; las principales preocupaciones giraban en torno a la situación económica, el desempleo y la guerra⁵; pero para fines de 1993, un año después de la firma de la paz, casi el 40% de la población expresaba preocupación sobre la violencia criminal (Cruz, 2003). En Nicaragua, donde la variación fue menos intensa, Cuadra reportó que, después de la guerra, «la inseguridad que ahora se refiere a situaciones de seguridad pública, gradualmente se convierte en el primer punto de la agenda nacional» (2002: 189). El implacable aumento del crimen fue un factor importante en este punto.

Los guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses están ahora más preocupados por la violencia común que lo que estuvieron en el pasado, inclusive, por la violencia política. Como lo expresó una campesina salvadoreña en una entrevista sobre inseguridad: «En el pasado, si no nos involucrábamos en política, nada pasaba: nadie lo mataba a uno o a sus parientes; pero ahora es diferente: aunque uno no se involucre en política y sólo se preocupe por su trabajo, no importa, porque uno puede ser asesinado por alguien que entra a su casa y lo asalte» (Cruz, 2000a).

Estas creencias señalan una nueva característica de la violencia en la Centroamérica de posguerra: su naturaleza impredecible. A diferencia de la inseguridad creada por la violencia y la represión impuesta por regímenes autoritarios y militares, en los cuales las personas sabían casi de forma instintiva cuáles áreas sociales y políticas estaban prohibidas por el régimen y, que por lo tanto, podrían aumentar el riesgo o la incertidumbre personal; la violencia y el crimen de posguerra actualmente desafían la seguridad pública al gestar temores sociales difusos.

Pero, como ya ha sido mencionado, no todos los países en posguerra exhiben los mismos tipos de violencia. A pesar de las similitudes en términos de tendencias, o más aún, en términos de la inseguridad pública, hay diferentes tipos de delincuencia y violencia común que afectan a las sociedades centroamericanas de forma distintiva. De manera general, mientras que Guatemala y El Salvador se han separado de Nicaragua en términos de violencia global, también se han distinguido por el gran problema del crimen organizado (secuestros, robos a bancos, redes de narcotráfico) y las pandillas juveniles (Moser y Winton, 2002).

Las formas predominantes de la violencia en la situación global de inseguridad pública en Guatemala son la delincuencia y el crimen común, las cuales se concentran en las áreas metropolitanas y se relacionan con el crimen organizado (Rodríguez y De León, 2000); pero, los linchamientos públicos constituyen probablemente la particularidad más importante de la violencia de posguerra en Guatemala. De acuerdo a CIEN (2002), entre los años 1996 y 2000 se han dado casi 200 linchamientos, los cuales han tomado

5. El porcentaje de las personas que mencionaban el problema del crimen era sólo de un 1%.

la vida de 625 personas en este mismo período. En su mayoría, estos linchamientos se presentan en áreas de poblaciones indígenas y surgen como un tipo de violencia de la comunidad para castigar a sospechosos de actos de delincuencia. Tales eventos marcan un tipo de violencia que raras veces se encuentra en otros países centroamericanos. Algunas autoras atribuyen este fenómeno a la historia particular de guerra y de resolución de conflictos en Guatemala⁶. Ellas sostienen que la participación de las masas en el asesinato de los sospechosos tiene que ver con el uso histórico, por parte del ejército guatemalteco, de comunidades indígenas para luchar en contra de los guerrilleros. Esta estrategia permitió la infiltración de informantes indígenas en el control de la vida comunitaria y promovió el castigo de aquellos individuos que eran vistos como peligrosos o miembros de la guerrilla. A pesar del final de la guerra, estos informantes continuaron operando en las áreas indígenas, impulsando a las comunidades a aplicar el «poder del pueblo» a aquellos señalados como criminales, sospechosos e inclusive a autoridades legales acusadas de proteger a los sospechosos de crímenes.

Esto conduce a la consideración de la manera en que se implementaron los Acuerdos de Paz, específicamente en el área de seguridad pública. De acuerdo con algunos investigadores (Dunkerley y Sieder, 1996), el proceso de institucionalización de las agencias de seguridad se tornó problemático dado que, a pesar de la creación de la policía civil, los militares continuaron interviniendo en temas de orden y de seguridad. Investigaciones recientes han señalado el papel que las PACs y el ejército están jugando en la organización de desórdenes, en el aumento de la corrupción de las agencias de seguridad y en la participación en redes de narcotráfico. Lo anterior también facilita las condiciones para la continuación de agentes de violencia estatal en Guatemala.

En El Salvador, por el contrario, a pesar de algunos asesinatos de líderes guerrilleros en 1993 y 1994, la violencia política ha sido, en gran parte, erradicada del crimen salvadoreño. Aunque el crimen y la delincuencia alcanzaron niveles considerablemente altos en los años posteriores a los Acuerdos de Paz y de 1997 a 2000, la sociedad salvadoreña enfrentó una ola de asaltos y robos a bancos y secuestros, la forma más común de crimen es aquel cometido en contra de la integridad personal. Esto, producto de un serio problema de pandillas o «maras» (Santacruz y Eastman, 2001), y por el aumento en la dinámica de ajusticiamientos o venganzas pospuestas, que posteriormente se convirtieron en un tipo de violencia «social»⁷ (PNUD, 2003). Un estudio encontró que había dos tipos de crimen y violencia en la sociedad salvadoreña: por un lado, el crimen con motivación económica, que tendía a concentrarse en las zonas urbanas del país, principalmente en San Salvador; y por otro lado, la violencia física en contra de individuos. Este tipo de crimen se concentraba mayormente en las zonas rurales del sector occidental del país y se hizo evidente después de una serie de masacres familiares (Cruz

6. Entrevistas con Jennifer Schirmer y Matilde González (noviembre 2002).

7. En El Salvador, el concepto de «violencia social» fue introducido por la Policía Nacional Civil para referirse a aquellos tipos de violencia interpersonal y diferenciarla de la «violencia delictiva» o delincuencia, que se refiere a los delitos por motivación económica (ver: <http://www.pncelsalvador.gob.sv/violencia/capitulo2.htm>).

et al., 2000). Después de 1998, tanto la «violencia social» como la «delincuencia» parecen haberse reducido de forma significativa, pero las pandillas juveniles, que se encuentran cada día más vinculadas con el crimen organizado y el narcotráfico, continúan siendo una de las principales fuentes de crimen y de violencia, en las zonas urbanas y rurales del país.

Finalmente, de acuerdo a los principales investigadores locales, la violencia nicaragüense también ha tenido dos vertientes (Saldomando, 1999; Cuadra, 2002); pero, en este caso, la división es entre, por un lado, el crimen común y la violencia que se asemeja a una delincuencia con motivaciones económicas, que también se concentra en las ciudades; y, por otro lado, la violencia que «se vincula con condiciones específicas relacionadas con la inestabilidad causada por la guerra y a las posteriores condiciones de fragilidad social y política» (Saldomando, 1999: 134). En otras palabras, los actores del segundo tipo de violencia son aquellos que jugaron un papel en la dinámica política local del conflicto armado, y por lo tanto, su uso de la violencia continúa estando relacionado con algún tipo de demanda social articulada. Los investigadores nicaragüenses han denominado «violencia inorgánica» al primer tipo de violencia y «violencia orgánica» a la segunda.

De acuerdo a datos proporcionados por Cuadra (2002), la violencia orgánica fue la principal fuente de inseguridad pública en los primeros años de la transición política. En 1991, el número de acciones armadas ejecutadas por los diferentes bandos de los combatientes desmovilizados o grupos paramilitares fue de 291; éstos alcanzaron su máximo valor en 1993, con 709 acciones, las cuales declinaron en los años posteriores. Por otro lado, aunque los incidentes de inestabilidad social experimentaron una caída entre los años 1991 a 1995, volvieron a aumentar en 1996 —probablemente por las elecciones que se llevaron a cabo ese año— para disminuir nuevamente en los años siguientes. Esto significa que la denominada violencia orgánica ha estado cediendo en los últimos años, mientras que la delincuencia común va en aumento.

Todas estas características de la violencia de posguerra en América Central señalan otro componente importante que distingue a la violencia de la región de la del resto de países en Latinoamérica, a excepción de Colombia. La violencia en América Central no es sólo un problema urbano, sino que también constituye un problema rural. La mayoría de los informes recientes sobre violencia en Latinoamérica la presentan como un problema eminentemente urbano, debido a los niveles de inseguridad que se experimentan en grandes ciudades como el Distrito Federal en México, São Paulo o Caracas (Arraigada, 2002). Sin embargo, en Centroamérica, como ya lo hemos visto, la violencia no sólo se ha concentrado en las ciudades, sino que también en las zonas rurales. Definitivamente, la delincuencia común ha sido «el problema» mayor, pero es imposible estudiar y comprender la ola de violencia de posguerra en Centroamérica sin considerar los linchamientos en las comunidades rurales guatemaltecas, las masacres a causa de venganzas personales en áreas cafetaleras en El Salvador y el levantamiento de anti-guerra combatientes armados en algunas regiones de Nicaragua.

Estas consideraciones son importantes para comprender las consecuencias de la violencia. El característico «componente rural» de la violencia de posguerra en

Centroamérica tiene un fuerte impacto en los diferentes aspectos de la vida social. La violencia destruye las condiciones para la gobernabilidad política, al afectar el capital social (Moser y Winton, 2002), al deteriorar el desempeño de las instituciones (Méndez, 1999) y al desgastar la cultura política democrática de los ciudadanos (Cruz, 2000b). Esta última constituye el alcance de este trabajo. En el siguiente capítulo, se abordan los temas de cultura política y legitimidad como variables clave para los procesos de democratización en Centroamérica.

IV. MARCO TEÓRICO: CONDICIONES PARA LA DEMOCRATIZACIÓN, CULTURA POLÍTICA, LEGITIMIDAD Y VIOLENCIA

Ha habido mucha discusión sobre si las transiciones democráticas necesitan o no prerequisites y si éstos constituyen o no categorías útiles para el análisis de los regímenes postransicionales (Karl, 1990). A partir del trabajo precursor de Dankwart Rustow (1999, publicado por primera vez en 1970) sobre las transiciones a la democracia, se acepta ampliamente que una cosa son las condiciones para el surgimiento de la democracia y que otra muy distinta es la evaluación de las condiciones que mantienen a una democracia ya establecida.

En el primer caso, la postura más popular dentro de la comunidad académica no es que tales condiciones existan, sino que sólo un acuerdo general entre las élites socio-políticas puede hacer posible un cambio de régimen (Karl y Schmitter, 1991). Es claro que en el caso de Centroamérica, y a pesar de las elecciones y las guerras, la transición democrática sólo fue posible cuando las diferentes élites decidieron, por razones diversas –que iban de intereses económicos a contextos internacionales (Torres-Rivas, 2001b)–, pactar acuerdos para establecer las condiciones mínimas para la democracia.

El segundo caso se refiere a las denominadas condiciones «funcionales»: aquellas circunstancias que hacen que un régimen funcione y que lo previenen de ser derrocado por un régimen autoritario (Rustow, 1999). El punto aquí no es analizar los factores que llevan al establecimiento de una democracia, o por lo menos el inicio de una transición democrática; más bien, aquellos factores que una vez efectuada la transición, ayuden a la sostenibilidad y el desarrollo de los regímenes democráticos. Éste es el caso de los regímenes centroamericanos. Entre las explicaciones sobre las circunstancias que hacen funcionar a la democracia hay dos que nos interesa señalar: primera, aquellas que se enfocan a las situaciones macroeconómicas y sociales, las cuales se vinculan con el desempeño económico y político de los regímenes; y segunda, la existencia de cierto conjunto de valores, normas y actitudes en los ciudadanos que apoyan el desempeño del régimen. Esta última tiene que ver con la cultura política. Este artículo se enmarca en este último tipo de explicaciones.

El concepto de cultura política fue desarrollado originalmente por Almond y Verba (1963), quienes la definieron como el conjunto de orientaciones psicológicas hacia la política de los miembros de una sociedad. En su estudio precursor en cinco países diferentes, ellos clasificaron los diferentes tipos de cultura política y afirmaron que un tipo

de cultura política, la participativa, tiende a predominar en las sociedades democráticas. Esto fue retomado posteriormente por Lipset (1994: 3), quien aseguró que «la democracia requiere de una cultura de apoyo, de la aceptación por parte de la ciudadanía y de las élites políticas del principio que fundamenta la libertad de expresión, comunicación, asociación, religión, de los derechos de los partidos de asociación, del gobierno de la ley, de los derechos humanos y otros similares. Estas normas no se producen de un día para otro». En esta línea, Diamond argumentaba que «independientemente de otras variables, la cultura política es importante para la democracia y el desarrollo de una cultura democrática, no puede tomarse a la ligera como el resultado natural de una práctica democrática o diseño institucional» (1993: 7).

Así, un régimen democrático sólo puede subsistir cuando la población –masas y élites– tienen la certeza de que las instituciones políticas existentes son las más adecuadas para la sociedad (Lipset, 1960); cuando la mayor parte de la población ve a este régimen como *the only game in town* (Linz y Stepan, 1996), o «el único juego en la ciudad». Esta certeza no se crea de un día para otro. En los regímenes democráticos que no dependen de la fuerza, la legitimidad es el producto del desempeño del sistema. Emanada de las percepciones de satisfacción de las necesidades básicas de la mayor parte de la población, y está relacionada con el comportamiento real de las autoridades y de los grupos de poder (Lipset, 1994). Como lo señaló Diamond (1993: 13): la legitimidad «se deriva, en parte, del desempeño de un régimen democrático a lo largo del tiempo, pero también se ve influenciada (especialmente en la vida temprana del régimen) por la manera en que instituciones democráticas específicas se articulan con las formas tradicionales y legítimas de autoridad, y luego por la socialización, la expansión de la educación y otros tipos de cambio social y cultural».

Lo anterior nos lleva a un par de consideraciones, las cuales son particularmente relevantes en el estudio de los casos centroamericanos. Primero, el desempeño es un desafío particular en las sociedades que están aprendiendo, por primera vez, sobre cómo funciona un régimen democrático. Debido a que no hay memoria histórica sobre cómo funciona la democracia, la presión por el logro de resultados es excepcionalmente crítica, especialmente cuando se concibe el vínculo entre la democracia y la satisfacción de necesidades, como es el caso en América Latina (Linz *et al.*, sin fecha). Segundo, todas las fuentes tradicionales de autoridad en Centroamérica están relacionadas con el ejército y con el uso abierto de la fuerza (Holden, 1996). Esto puede significar que la legitimidad y el apoyo político para los regímenes democráticos en Centroamérica se han basado en la capacidad del sistema de oprimir el desorden. Por esta razón, el desempeño del régimen, que constituye la base para la legitimidad, no sólo es evaluado por el crecimiento económico y la distribución de la riqueza, como lo propuso Lipset originalmente, también se construye sobre la capacidad de hacer cumplir la ley y mantener el orden (Diamond, 1993).

No todos estos temas tienen la misma importancia para la construcción de la legitimidad y la generación de apoyo al sistema. Los temas económicos siempre han atraído más interés, porque afectan la calidad de vida de la población, especialmente en aquellos países con mayores niveles de pobreza e inequidad, como en los de América Latina.

Las personas tienden a evaluar el buen o mal funcionamiento de un gobierno en función de la riqueza que han podido adquirir con él, muchas veces sin considerar la transparencia o el respeto por las reglas. Lo más importante para América Latina es que en los últimos años, el problema de inseguridad se ha añadido a la noción social de bienestar, como resultado de los elevados niveles de crimen y violencia en la región.

La violencia que predomina ahora en los países de Latinoamérica, especialmente en los países centroamericanos en situación de posguerra, puede afectar la legitimidad y el apoyo político necesario para que estas democracias sobrevivan. Puede afectar la cultura política democrática, porque la inseguridad logra convencer a muchos ciudadanos sobre la necesidad de restringir ciertas libertades políticas que fueron ganadas con el proceso de democratización; o porque los ciudadanos pueden llegar a creer que la democracia no es el mejor sistema de gobierno para asegurar la seguridad pública. Como resultado de lo anterior, los acuerdos sociales pueden construirse en torno a la necesidad de devolver el poder a las fuerzas de coerción social o a algún líder autoritario, como ya ha sido el caso en algunos gobiernos locales en Centroamérica.

Aunque la literatura sobre violencia común y democracia es limitada⁸, usualmente se ha enfocado al impacto del crimen en el desempeño de las instituciones y en el establecimiento del Estado de Derecho (Méndez *et al.*, 1999). Más que ver el impacto en la legitimidad pública, la mayoría de los estudios se han concentrado en analizar el impacto de la violencia e inseguridad en el capital social y la tolerancia, asumiendo éstos como valores fundamentales para el funcionamiento democrático. Por ello, y tomando en cuenta la escasez de estudios empíricos que vinculan la violencia y la inseguridad ciudadana con el apoyo al sistema, este trabajo pretende probar la asociación teórica entre legitimidad y violencia común en países centroamericanos en situación de posguerra, retomando el marco analítico propuesto por Cruz (2000b) y Ranum (2002). En otras palabras: la violencia y la inseguridad erosionan el apoyo al sistema, porque, entre otras razones, reducen la credibilidad en las instituciones del sistema y porque, dadas las características de la violencia de alterar el orden público, dan lugar a actitudes que apoyan a los regímenes autoritarios alternativos.

Esto no quiere decir que la violencia y la inseguridad son los únicos factores que generan falta de legitimidad y apoyo al régimen democrático. Tampoco sería correcto decir que la violencia es necesariamente el factor más importante en el daño a los procesos de democratización. No obstante, no sería equivocado decir que la violencia y la inseguridad pueden jugar un papel fundamental en la desestabilización de los procesos democráticos al debilitar la legitimidad del nuevo sistema. La violencia común puede perjudicar la frágil ruta hacia la democratización en los países centroamericanos en situación de posguerra, no sólo porque desgasta directamente al Estado de Derecho o porque amenaza los derechos humanos más básicos de los ciudadanos, sino también porque puede destruir la infraestructura de legitimidad necesaria para los nuevos regímenes. Como lo mencionaba Seligson (2002), América Latina tiene una larga historia

8. La mayor parte de la literatura que vincula los conceptos de violencia y democracia se enfoca a la violencia política y no al crimen o a la violencia común.

de inestabilidad y regresiones autoritarias. Centroamérica no es la excepción de esta tendencia negativa; más aún, estos países han sido inestables aun sin haber conocido regímenes democráticos. A juzgar por la historia en otras latitudes, no hay ninguna razón para pensar que los actuales e híbridos regímenes democráticos estarán exentos de estos retrocesos.

La comparación de esta relación entre los tres países centroamericanos de posguerra, con características socioeconómicas similares, pero con diferencias en los procesos de democratización y niveles de criminalidad, constituyen un marco perfecto para probar las hipótesis propuestas en los párrafos anteriores.

V. EL ENFOQUE METODOLÓGICO: LA INVESTIGACIÓN POR ENCUESTAS

Como ya se ha señalado, esta sección se basa en el análisis de datos de encuestas de opinión pública llevadas a cabo en Centroamérica, y se concentra en el análisis de datos levantados en entrevistas a guatemaltecos, salvadoreños y nicaragüenses. La suposición básica es que las creencias, actitudes y vivencias de las personas constituyen categorías importantes para el análisis de los hechos políticos, y las encuestas son un medio para abordarlas.

V.1. Datos

Este estudio utiliza tres encuestas del proyecto de Opinión Pública de Latinoamérica de la Universidad de Pittsburg. Las encuestas se aplicaron en tres países centroamericanos en situación de posguerra durante el año 1999, utilizando cuestionarios que contenían un conjunto de preguntas similares. Los datos combinados hacen una muestra total de 6.738 entrevistas. Los tamaños de las muestras para cada uno de los países fueron: Guatemala, 1.200; El Salvador, 2.914 y Nicaragua, 2.624. Todas las entrevistas se realizaron en español, por personal local entrenado, a excepción de 48 entrevistas que se condujeron en dialectos mayas en Guatemala. En cada país, se diseñaron muestras nacionales probabilísticas para representar con precisión la distribución de la población. Debido a que en cada país se realizaron muestreos adicionales para incorporar a cierta población neta, los datos brutos finales fueron ponderados con la finalidad de mantener una distribución representativa de la muestra. El error muestral para las encuestas de Nicaragua y El Salvador es inferior a $\pm 0,02$ (2%) y $\pm 0,028$ (2,8%) para la de Guatemala.

V.2. *Ítems y variables*

V.2.1. Violencia, victimización e inseguridad

Se utilizó un solo ítem de medición de victimización para determinar los niveles de crímenes y violencia en los análisis y los modelos. Se les preguntaba a las personas si habían sido o no víctimas de algún incidente violento en los 12 meses anteriores a la entrevista: «¿Ha sido víctima de alguna agresión o de cualquier tipo de crimen en los últimos doce meses?». En las encuestas de los tres países, se formuló la pregunta con las mismas palabras.

La inseguridad también se midió como un ítem; esto porque en 1999, el diseño original de las encuestas no contemplaba los temas de inseguridad como importantes para ser desarrollados. El ítem de inseguridad era el siguiente: «Considerando la colonia o el barrio en que reside y tomando en cuenta la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿qué tan seguro se siente: muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?». Este ítem fue utilizado en las encuestas nicaragüense y salvadoreña, pero las palabras exactas del ítem utilizado en Guatemala fueron distintas: «¿Qué tan seguro se siente caminando por la noche en su colonia o barrio: muy seguro, algo inseguro, un poco inseguro, bastante inseguro?» (ver Anexo).

V.2.2. La legitimidad como apoyo al sistema político

El impacto de la violencia, vía la victimización y la inseguridad, en la cultura política democrática se medirá en términos de legitimidad. La legitimidad es medida por medio de una escala de apoyo político difuso, según la idea de Pippa Norris sobre el modelo de apoyo al sistema propuesto por David Easton (Norris, 1999a). En el caso de El Salvador y Nicaragua, la escala se basa en cinco ítems, cada uno de los cuales recibe un puntaje del 1-7. Ésta fue desarrollada en Alemania y Estados Unidos, y fue utilizada por Seligson en varios estudios sobre cultura política en América Latina (2002; 2000). Los ítems son: a) ¿Hasta qué punto garantizan las cortes un juicio libre y justo?; b) ¿cuánto respeto tiene usted por las instituciones políticas del país?; c) ¿qué tan orgulloso se siente del sistema político del país?; d) ¿qué tanto apoya al sistema político del país?; y e) ¿hasta qué punto piensa que los derechos básicos de los ciudadanos son protegidos por nuestro sistema político? Los resultados de los ítems fueron sumados y luego convertidos a una escala del 0-10, donde 0 es el nivel más bajo de apoyo político y 10 el más alto. La escala era confiable para cada país: el Alfa de Cronbach para Nicaragua era de 0,74; y 0,76 para El Salvador. En Guatemala, la escala de apoyo político difuso se construyó sólo con tres ítems, que tenían una redacción diferente, en una escala métrica de 3 puntos: a) ¿cuánta confianza tiene en los tribunales?; b) ¿cuánta confianza tiene en las instituciones públicas?; c) ¿cuánto orgullo siente por el sistema de gobierno de Guatemala? En este caso, los ítems sumados fueron convertidos a una escala única del 0-10 para hacerla comparable con las escalas

de los otros países. El Alfa de Cronbach mostró un nivel mediano-bajo de confiabilidad: 0,52°.

V.3. *Las hipótesis empíricas*

La hipótesis empírica sostiene que las personas que han sido víctimas de crimen común o violencia tenderán a mostrar, con más frecuencia, bajos puntajes en la escala de apoyo político al sistema que aquellos que nunca fueron víctimas. Adicionalmente, aquellos que expresan sentimientos más fuertes de inseguridad debido al crimen, también tenderán a obtener bajos puntajes en la escala de apoyo político al sistema que aquellos que expresan cierto grado de seguridad.

Estas hipótesis serán evaluadas utilizando pruebas estadísticas de significación, para establecer una relación probable entre victimización e inseguridad y la variable cultural mencionada anteriormente. Se utilizarán regresiones de cuadrados mínimos ordinarios (OLS, en inglés) para probar las interacciones entre estas variables y otras que puedan ser críticas para la legitimidad de los sistemas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

VI. LOS HALLAZGOS

VI.1. *Los resultados: victimización y sentimientos de inseguridad*

El primer paso es considerar los resultados generales de las variables en cuestión, obtenidas de las bases de datos: victimización, inseguridad y los constructos de apoyo

CUADRO II
 VICTIMIZACIÓN Y SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD EN NICARAGUA,
 EL SALVADOR Y GUATEMALA (en porcentajes)

País	Victimización personal	Sentimientos de inseguridad de los ciudadanos			
		Muy seguro	Algo seguro	Algo inseguro	Muy inseguro
Nicaragua	14,2	27,5	35,4	21,8	15,3
El Salvador	22,2	23,3	34,5	23,8	18,5
Guatemala*	22,9	25,8	24,2	22,1	27,9

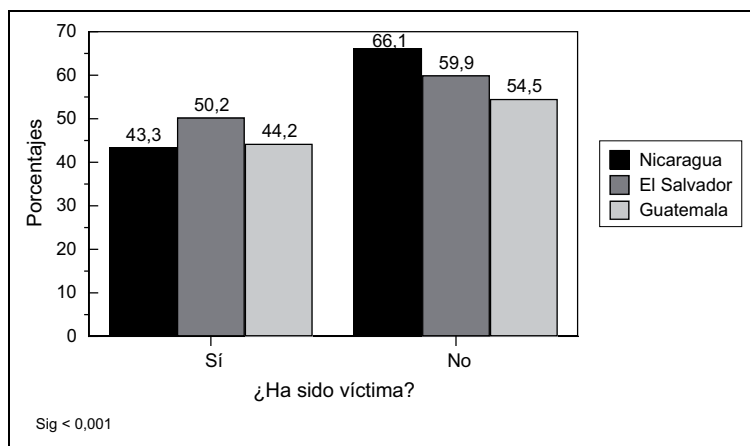
* Las respuestas a los sentimientos de inseguridad en Guatemala no son del todo comparables, ya que se utilizó una pregunta diferente, tal como se expuso en la sección anterior.
 Fuente: Elaboración propia.

9. Ver la descripción de los ítems y de las escalas en el Anexo.

político. Como lo muestra el Cuadro II, durante 1998-1999, los niveles de victimización fueron mayores en Guatemala y El Salvador que en Nicaragua, tal y como era esperado por la información previamente recopilada (ver Cuadro I). Aproximadamente 22 personas de cada 100 fueron víctimas de crímenes violentos durante 1998 y 1999 en Guatemala y El Salvador; mientras que en Nicaragua, la cifra cae a 14 de cada 100. Una tendencia similar se observa en las respuestas sobre la inseguridad de los ciudadanos, aunque las diferencias son menos notorias. Nicaragua presenta los niveles más altos de sentimientos de seguridad en los ciudadanos, con casi un 63% de personas que se sienten seguras o algo seguras. La cifra de El Salvador es un tanto menor (57,8%), y la de Guatemala es la menor: 50%.

Los datos de las encuestas muestran que la victimización personal y los sentimientos de inseguridad están estadísticamente relacionados. En los tres países, las personas que fueron víctimas de crímenes violentos tendieron a expresar menores sentimientos de seguridad que aquellos que no fueron víctimas de tales crímenes. Las diferencias son más notorias en el caso de Nicaragua, cuando 43,3% de las personas victimizadas se sentían seguros o algo seguros, en contraste con el 66,1% que no había sufrido de crímenes. En Guatemala y El Salvador, la diferencia fue menos evidente, pero la tendencia es que la población victimizada tiene un menor sentimiento de seguridad que aquellos ciudadanos no victimizados (ver Figura I).

FIGURA I
 CIUDADANOS QUE SE SIENTEN SEGUROS DE ACUERDO
 A SU CONDICIÓN DE VICTIMIZACIÓN PERSONAL

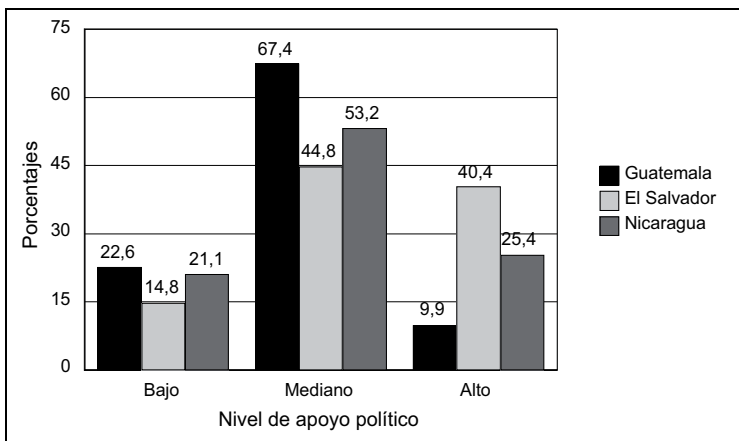


Fuente: Elaboración propia.

VI.2. Los resultados: el apoyo al sistema político

Tal y como se explicó en la sección metodológica, la medida para el apoyo político en Centroamérica fue un conjunto de ítems que extraen el apoyo difuso por las instituciones del sistema. Todos estos ítems fueron convertidos a escalas del 0 al 10 para sondear el nivel de apoyo político que cada país tiene. Para ilustrar las diferencias y similitudes en los niveles de apoyo político en América Central, la Figura II presenta una comparación de los resultados, ampliamente categorizados en tres niveles: bajo, medio y alto apoyo para el sistema¹⁰. El resultado es muy interesante, porque muestra que los ciudadanos centroamericanos no presentan los mismos niveles de apoyo político para sus respectivos sistemas. Como se puede observar, el público salvadoreño muestra los niveles más altos de apoyo político, ya que el 40,4% de los encuestados se ubican en los puntos más altos de la escala y sólo el 14,8% en los más bajos. De forma contraria, los guatemaltecos se destacan como los que expresan menos apoyo para su sistema. De acuerdo a las cifras, sólo un 10% de los encuestados manifestaron un fuerte apoyo para sus instituciones y un 22,6% se ubicaría en la sección más baja de la escala. Finalmente, Nicaragua se encuentra en medio de los dos países, ya que concentra a más del 75% de su población en posiciones medias o altas en la escala¹¹.

FIGURA II
 NIVELES DE APOYO POLÍTICO PARA LOS SISTEMAS
 CENTROAMERICANOS EN SITUACIÓN DE POSGUERRA, 1999



Fuente: Elaboración propia.

10. Esta clasificación se realizó por motivos de exposición y se construyó sumando los puntos en la escala, de la siguiente manera: de 0 a 3,33 = nivel bajo; de 3,33 a 6,66 = nivel medio; de 6,66 a 10 = nivel alto.

11. El promedio aritmético brinda una idea sobre el posicionamiento de los países. La media global es: 5,72 para El Salvador; 5,07 para Nicaragua y 4,31 para Guatemala.

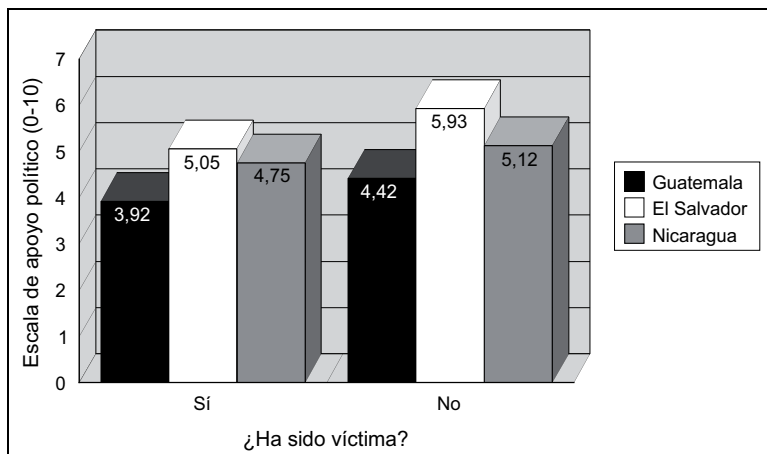
De manera general, estos resultados concuerdan con las evaluaciones sobre la estabilidad política en América Central, que muestran a El Salvador como el régimen relativamente más estable de los tres analizados en este trabajo y a Guatemala como el menos estable (Maihold y Córdova, 2001) y sugieren que las condiciones de estabilidad o inestabilidad podrían estar relacionadas con el apoyo de los ciudadanos a los sistemas de esos países.

VI.3. *Victimización, sentimientos de inseguridad y apoyo político al sistema*

VI.3.1. Las relaciones particulares de la violencia con el apoyo político al sistema

Una vez establecida la distribución del apoyo político en las poblaciones centroamericanas de posguerra, el siguiente paso es evaluar la relación individual entre esta variable y las condiciones de victimización e inseguridad. Como se muestra en la Figura III, las víctimas de violencia criminal en los tres países tienden a tener menores puntajes en la escala de apoyo político (0-10), que los ciudadanos que no han sido víctimas de crímenes. Por ejemplo, el puntaje promedio en la escala de apoyo político de los guatemaltecos que han sido víctimas de crímenes es 3,92, mientras que el promedio para el resto de los ciudadanos de ese país es mayor: 4,42. En Nicaragua, la media aritmética de apoyo político entre víctimas es de 4,75 y 5,12 para el resto de la población. Pero las diferencias son más evidentes en el caso de El Salvador, en donde las víctimas de agresiones y robos tienen un promedio de 5,05 en la escala, mientras que los que no

FIGURA III
 APOYO POLÍTICO Y VICTIMIZACIÓN EN GUATEMALA,
 EL SALVADOR Y NICARAGUA, 1999

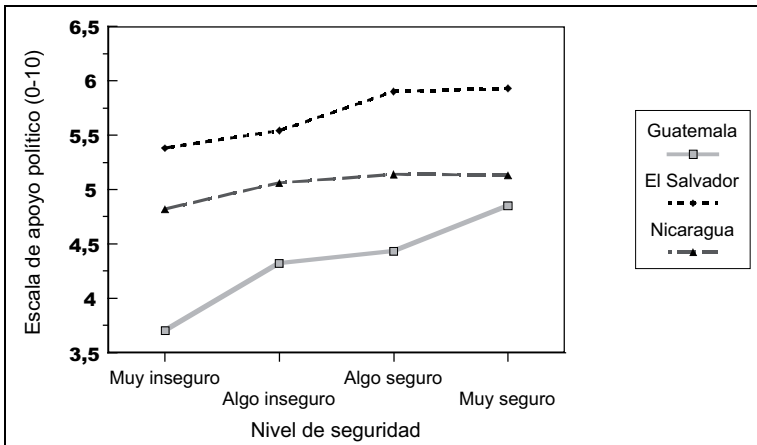


Fuente: Elaboración propia. Sig. < 0,05.

han sido víctimas (por lo menos en el año anterior a la conducción de la encuesta) alcanzan un puntaje de 5,95. En otras palabras, hay casi un punto de variación entre los dos grupos. A pesar de que las diferencias son pequeñas, en todos los casos resultaron ser estadísticamente significativas con las pruebas del ANOVA¹², pero en El Salvador los resultados de la prueba fueron más contundentes. Este último resultado implica que las personas que han sido víctimas de crímenes se diferencian claramente del resto de la población en términos de los niveles de apoyo político que expresan hacia el régimen.

Estos resultados establecen una relación individual directa entre la victimización y el apoyo político al sistema. Los datos también muestran otra relación individual, en este caso, con los niveles de sentimientos de seguridad. De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura IV, mientras más seguros se sienten los centroamericanos, más tienden a apoyar al sistema, por lo menos en términos actitudinales. Al examinar los

FIGURA IV
 APOYO POLÍTICO Y SENTIMIENTOS DE INSEGURIDAD
 EN GUATEMALA, EL SALVADOR Y NICARAGUA, 1999



Fuente: Elaboración propia. Sig. < 0,05 para Guatemala y El Salvador.

promedios de apoyo político en cada país, las tendencias muestran que las personas que se sienten seguras obtienen mayores puntajes en la escala (Guatemala, 4,85; El Salvador, 5,93 y Nicaragua, 5,13) que aquellas que expresan niveles importantes de inseguridad y temor al crimen (Guatemala, 3,7; El Salvador, 5,38; y Nicaragua, 4,82). No obstante, en este caso, las diferencias son estadísticamente significativas sólo para los casos de Guatemala y El Salvador, pero no para Nicaragua. Esto implica que las diferencias en los puntajes de apoyo político en Guatemala y El Salvador no son producidas al azar, sino que son un efecto de la condición de inseguridad de sus ciudadanos;

12. Pruebas de Análisis de Varianza.

mientras que en Nicaragua, esta diferencia puede ser causada por otras condiciones o variables y no precisamente por los sentimientos de inseguridad.

Estas cifras parecen confirmar la hipótesis general de que la violencia y la inseguridad reducen el apoyo político de la población a los sistemas centroamericanos de posguerra, ya que muestran que las personas victimizadas y los ciudadanos temerosos tienden a obtener puntajes más bajos en la escala de apoyo político. Sin embargo, estos resultados tienen que ser probados con relación a otras variables y así evitar conferirle una importancia excesiva a las variables de victimización e inseguridad. Es posible que el vínculo entre victimización y apoyo político sea un producto secundario de la relación con otras variables, como por ejemplo, la educación, en tanto que la victimización afecta más a personas educadas, quienes generalmente tienen una comprensión más amplia de la forma en que funcionan los sistemas políticos.

VI.3.2. El impacto de la violencia en el apoyo al sistema político

Como se ha mencionado anteriormente, el apoyo político no se ve afectado sólo por la violencia y la inseguridad. Pueden existir otras condiciones, como las actitudes políticas o las condiciones socioeconómicas, que afectan la forma en que las personas perciben al sistema y su desempeño. Para abordar estas condiciones, se aplicará una prueba de Regresión de Cuadrados Mínimos Ordinarios (OLS). Específicamente, se medirá la interacción entre todas estas variables, incluyendo victimización y sentimientos de inseguridad, con respecto a los niveles de apoyo político de los ciudadanos.

Dado que el apoyo político se basa en percepciones, el modelo incluye algunas variables sobre los niveles de información proporcionados por los medios de comunicación. Las primeras pruebas del modelo también incluían variables tipo *dummy* (simuladas) de violencia e inseguridad. Éstas eran: tasas de homicidios para cada departamento, tasas de posesión de armas y tasas de linchamientos (en el caso de Guatemala)¹³. No obstante, estas variables probaron no ser predictores significativos de apoyo político, por lo que fueron descartadas de las pruebas subsiguientes, que al final sólo se desarrollaron utilizando los datos recopilados de las encuestas de opinión pública.

Los resultados empíricos de las pruebas de regresión para cada uno de los países centroamericanos se presentan en el Cuadro III. La variable dependiente es la escala de apoyo al sistema político, mientras que la victimización y los sentimientos de inseguridad se utilizaron como predictores, entre otras variables como género, edad, educación,

13. Estas variables se incluyeron al agregar a cada caso individual, la tasa de homicidio de la provincia en la que residía la persona. Por ejemplo, a todos aquellos que vivían en Petén en Guatemala, se les sumó la tasa local de homicidios (62,7 por 100.000), diferente a la de aquellos que vivían en Huehuetenango (3 por 100.000). En el caso de la posesión de armas, el procedimiento fue similar. En Nicaragua, a todas las personas que vivían en la provincia de Chontales se les sumó la tasa local de armas por 100.000 habitantes: 2.842; diferente a la de los que vivían en Madriz: 412 por 100.000. Esto crearía un índice *dummy* (artificial) (Índice de violencia del ambiente local en el que la gente de cada país vive).

ingreso familiar, empleo, escala ideológica (izquierda-derecha) y victimización por violencia política. Género, edad y educación fueron introducidas como variables socio-económicas de control, ya que este tipo de variables pueden influir en los resultados de las pruebas, en tanto que las condiciones de género, edad y niveles educativos determinan la forma en que las personas perciben la situación política. Se incluyeron también el ingreso familiar y el empleo, porque de acuerdo a la teoría clásica de legitimidad y apoyo político este último puede ser moldeado por la capacidad del sistema de proporcionar bienestar económico y riqueza, por lo que se espera que personas con bajos salarios o que se encuentran desempleados no apoyen al sistema de la misma forma que lo hacen las personas acomodadas. La ideología, basada en una escala del 1 al 10, también se introdujo, considerando las preocupaciones sobre la importancia del autopoicionamiento ideológico para el apoyo político (Norris, 1999b). Finalmente, y debido a los cambios que se dieron en las transiciones políticas centroamericanas, en las pruebas de Guatemala y El Salvador se incluyó la victimización debido a violencia política pasada. Como éstos son regímenes diferentes a los que aplicaban intensos niveles de violencia política, esta variable podría ser útil para identificar un tipo de «legitimidad por *default* (omisión)» (Linz y Stepan, 1996), lo que significa que las personas que fueron víctimas de la violencia política en el pasado podrían apoyar los regímenes actuales porque ya no constituyen una amenaza de victimización directa¹⁴.

Los resultados del modelo final son extremadamente interesantes y confirman, en la mayoría de los casos, el vínculo entre la violencia y el apoyo al sistema político en los nuevos regímenes centroamericanos, pero esta relación es moldeada por otras variables, las cuales en algunos casos son más importantes que los temas de violencia e inseguridad.

Los coeficientes revelan que la edad es un predictor importante para el apoyo político (significancia $< 0,05$) y que se asocia de forma negativa con la escala de apoyo político. En los tres países, las personas jóvenes eran más propensas a apoyar el sistema que las personas adultas o mayores. Probablemente, esto sea porque, como dice Seligson (2002: 422) «...la gente mayor ha vivido lo suficiente como para decepcionarse de la política y tiene una visión agotada del sistema político», contrario a los jóvenes, que tienen esperanzas en el sistema y en lo que éste les puede ofrecer.

De igual forma, los datos muestran que la educación tiene una relación negativa significativa con el apoyo político en El Salvador y Nicaragua, pero no en Guatemala. Esto quiere decir que los salvadoreños y nicaragüenses con mayores niveles de educación tienden a apoyar menos al sistema que las personas con menos educación, que tienden a expresar un mayor apoyo. Las razones para estos resultados no son claras; probablemente, se produce un mayor grado de escepticismo en los ciudadanos que están

14. Aquí, estoy suponiendo que la principal amenaza venía del gobierno y no de las fuerzas insurgentes. En Guatemala y El Salvador, las Comisiones de la Verdad establecieron que entre el 90 y 95% de las violaciones a los derechos humanos fueron ejecutadas por fuerzas gubernamentales o paragubernamentales (ver COMISIÓN DE LA VERDAD DE EL SALVADOR, 1993; y COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO, 1996).

CUADRO III
 PREDICTORES DE APOYO POLÍTICO EN PAÍSES CENTROAMERICANOS EN SITUACIÓN DE POSGUERRA

Variables Independientes	Guatemala		El Salvador		Nicaragua	
	B	Sig.	B	Sig.	B	Sig.
(Constante)	4,854 (0,658)	0,000	5,516 (0,411)	0,000	4,69 (0,435)	0,000
Género	0,0006 (0,002)	0,694	-0,111 (0,104)	0,285	0,003 (0,113)	0,725
Edad	-0,012 (0,006)	0,029	-0,008 (0,003)	0,014	-0,012 (0,004)	0,002
Educación	0,140 (0,073)	0,057	-0,050 (0,012)	0,000	-0,004 (0,014)	0,004
Ingreso familiar			-0,114 (0,030)	0,000	0,107 (0,027)	0,000
Empleo			-0,371 (0,106)	0,000	-0,186 (0,116)	0,035
Ideología	0,099 (0,031)	0,002	0,140 (0,018)	0,000	0,006 (0,021)	0,001
Víctima de violencia política en el pasado	0,578 (0,220)	0,009	-0,280 (0,100)	0,005		
Victimización de crimen	-0,503 (0,192)	0,009	-0,476 (0,115)	0,000	-0,322 (0,156)	0,046
Sentimientos de inseguridad	-0,317 (0,72)	0,000	-0,195 (0,047)	0,000	-0,101 (0,055)	0,092
N	1,200		2,914		2,624	
R ²	0,083		0,112		0,025	
F Test	0,000		0,000		0,000	

Modelo es OLS. Coeficientes no están estandarizados. Error típico en paréntesis. Codificación de género: 1 = masculino; 2 = femenino. Codificación de empleo: 0 = desempleado; 1 = empleado. Ideología en la escala de autopoicionamiento, donde: 1 = extrema izquierda y 10 = extrema derecha. Codificación de víctima de violencia política y victimización: 0 = no víctima; 1 = víctima.

mejor informados sobre la dinámica política del país. De forma inversa, los ciudadanos analfabetos o con poca educación, pueden tener más respeto por el sistema porque no son influenciados por el tratamiento diario de los medios con respecto a la agenda nacional.

El ingreso familiar mensual reportado fue incluido en los modelos de El Salvador y Nicaragua, pero no de Guatemala, porque en este último país dicha variable afectaba la significación del resto de las variables, a excepción de los sentimientos de inseguridad y edad. Sin embargo, el ingreso resultó estar asociado de una forma distinta

con la escala de apoyo al sistema político. Mientras que en El Salvador esta relación es negativa, implicando que las personas con ingresos familiares más bajos se inclinan a apoyar más al sistema; en Nicaragua, la asociación es positiva: a mayor ingreso familiar, más alta es la legitimidad que la gente le otorga al sistema y viceversa. Para ambos países (El Salvador y Nicaragua), esta relación es muy fuerte y en el caso de Nicaragua este fenómeno puede explicarse por las teorías que resaltan la capacidad del sistema de dar resultados. En otras palabras, se enfatiza la importancia de un buen estándar de vida para ganar legitimidad. Sin embargo, eso no se aplicaría al caso salvadoreño, en el cual los ciudadanos desaventajados socioeconómicamente parecen estar más cómodos con el sistema que los más ricos. Esta discrepancia entre los casos nicaragüenses y salvadoreños puede ser explicada tomando en cuenta las diferencias en el desempeño económico actual de El Salvador y Nicaragua. Aunque ambos países son pobres y han enfrentado crisis económicas después de la transición, la situación nicaragüense es peor que la de su vecino; los niveles de pobreza e inequidad en Nicaragua son mayores que en El Salvador; y los gobiernos nicaragüenses de posguerra han tenido serias dificultades manejando la situación.

Por su parte, el empleo también resultó estar asociado con el apoyo político en Nicaragua y El Salvador. En este caso, la relación tuvo una orientación negativa, implicando que las personas que no tienen trabajo tienden a expresar más apoyo por el sistema que el resto de la población.

El autopercepcionamiento ideológico (izquierda-derecha) estuvo asociado de forma positiva en los tres países. Los salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos de derecha expresan más apoyo político para sus respectivos sistemas que los ciudadanos de izquierda. Esto es, probablemente, porque en estos tres países, los gobiernos ejecutivos continúan teniendo una fuerte orientación de derecha. Como lo explica Norris (1999b), basándose en datos de la Encuesta Mundial de Valores, el resultado sobre quiénes ganan y quiénes pierden en la competencia por el poder, influye en la distribución de apoyo político en la población. Los regímenes con orientación de derecha recibirían más apoyo político del público de derecha que del público de izquierda. Los ciudadanos con orientación ideológica de derecha brindarían un fuerte apoyo a los sistemas centroamericanos de posguerra.

Uno de los resultados más interesantes, sin embargo, se refiere al obtenido con la variable de violencia política pasada. Como ya se mencionó, esta variable identifica a los ciudadanos que fueron víctimas de la violencia política previa o durante la guerra. Esta variable sólo pudo aplicarse en Guatemala y El Salvador; y en ambos países, la regresión comprobó la existencia de una relación significativa entre haber sido víctima y la escala de apoyo político. Pero, mientras que en Guatemala se observa una relación positiva, en El Salvador la relación es negativa. Esta «inconsistencia» merece un análisis particular. En Guatemala, los datos sugieren que las personas afectadas por la guerra o por la violencia política, tienden a apoyar más al actual sistema político que los que no fueron víctimas de este tipo de violencia. Una explicación adecuada sería que los guatemaltecos que fueron victimizados están más satisfechos con el presente sistema, porque no representa una amenaza como en el pasado. Ellos reconocerían que vale

la pena apoyar el sistema, a pesar de los problemas que esto implique. Por el contrario, los salvadoreños expresan su apoyo por el sistema de una manera inversa: las personas que no fueron afectadas en el pasado tienden a mostrar más apoyo político por el sistema. No hay explicaciones posibles que se puedan extraer de los datos, pero sería importante considerar los clivajes políticos de los que fueron afectados y de los que no fueron afectados por la violencia política, ya que ellos podrían estar expresando sus frustraciones o satisfacciones con el alcance de la transición política.

La variable de victimización por violencia común probó ser un predictor negativo para el apoyo al sistema político en los tres países, implicando que aquellos que han sido víctimas de violencia común tienden a reflejar menos apoyo por el sistema que aquellos que no han sido victimizados. No obstante, la solidez de esta relación no es la misma en los tres países. Aunque siempre resultaron ser significativos, los datos de Nicaragua muestran una relación más débil, en contraste con los de El Salvador, que son los más fuertes. La interpretación es que en El Salvador y Guatemala, la victimización por crimen tiene un efecto importante en los niveles de apoyo al sistema político. De hecho, la comparación entre todos los coeficientes salvadoreños refleja que, aparte de la inseguridad y de la ideología, la victimización por crimen tiene el efecto más determinante en la forma en que las personas perciben al sistema político. Lo anterior significa que la hipótesis que establece que el crimen erosiona el apoyo ciudadano al sistema político, se confirma especialmente en los casos de El Salvador y Guatemala. Por el contrario, en el caso de Nicaragua, la variable de victimización es la más débil del modelo, aunque mantiene cierta importancia; pero son los ingresos familiares, la educación y la ideología los principales predictores del apoyo político en este país.

Los sentimientos de inseguridad también juegan un papel incontestable en los casos de Guatemala y El Salvador, pero no en Nicaragua. En Guatemala y El Salvador, mientras más segura se sienta la gente, más tiende a apoyar el sistema político y viceversa. Esto último no implica que en Nicaragua la relación sea diferente, pero al incluirse otras variables, la relación con la inseguridad pierde significación estadística. Habiendo dicho esto, se confirma, para los casos de Guatemala y El Salvador, la hipótesis que establece que la inseguridad desgasta el apoyo al sistema político. En Guatemala, los sentimientos de inseguridad (qué tan insegura se siente la gente cuando piensa sobre el crimen) constituyen el predictor individual más importante para el modelo, más que la victimización por el crimen, la victimización política y la ideología. En El Salvador, la condición de inseguridad es también más importante que la victimización por crimen violento, pero sólo es ligeramente más significativa.

En resumen, es posible decir que tanto la victimización como la inseguridad debida a la violencia, juegan papeles importantes en la legitimidad de los regímenes de posguerra en Guatemala y El Salvador. Estos países han enfrentado algunas de las tasas más altas de criminalidad en el hemisferio occidental y han sido testigos de la pérdida de confianza de su población en los sistemas políticos a causa, en parte, de la violencia, de una forma más evidente que en Nicaragua. En este país, en cambio, la edad, el ingreso económico, la educación y la ideología son más importantes que la violencia y la inseguridad en la predicción del apoyo de los nicaragüenses para su gobierno. Así,

en el caso de Nicaragua, posiblemente, deben buscarse en esos aspectos, más que en la violencia, las causas de insatisfacción de las personas con el sistema y las causas de la inestabilidad del país.

En Guatemala y El Salvador, la violencia y la inseguridad se combinan con la ideología y la victimización por violencia política para explicar el actual apoyo al sistema político. Por lo tanto, los niveles de legitimidad que ostentan los gobiernos están parcialmente determinados por el problema de la violencia. No obstante, es importante reconocer que la victimización y la inseguridad no son los únicos actores en este fenómeno de ruptura de la legitimidad política. De hecho, los indicadores de la magnitud de la varianza mencionada (R^2) son relativamente bajos y sugieren la existencia de un rango más amplio de variables explicativas que no han sido consideradas en el modelo, especialmente para el caso de Nicaragua. Aun en el caso de El Salvador, que presenta la mayor R^2 explicando esta varianza (0,112), hay muchas otras condiciones que no se han considerado y que pueden explicar el apoyo político en este país. En otras palabras, la legitimidad de los regímenes centroamericanos de posguerra puede ser el producto de otras condiciones adicionales a la violencia y la inseguridad, pero la importancia de estas dos es indudable.

VII. CONCLUSIONES

Uno de los problemas que enfrentan los regímenes postransicionales es la necesidad de demostrarle a sus ciudadanos, tanto a las élites como a las masas, que son igual de buenos o mejores que los gobiernos previos a la hora de gobernar. Esta suposición es más crítica cuando se hace referencia a transiciones cuyo resultado ha sido una democracia primeriza como es el caso de los países centroamericanos en situación de posguerra. Como ya hemos visto, Guatemala, El Salvador y Nicaragua no son sociedades que restauraron una democracia previamente existente. En estos tres países, no sólo tuvo que establecerse la democracia como un procedimiento por primera vez en la historia, sino que las instituciones también tuvieron que hacer esto posible. Las instituciones estatales previas estaban tan comprometidas con los regímenes autoritarios, que tuvieron que ser desmanteladas o neutralizadas para dejar que las instituciones democráticas se establecieran.

No obstante, la subsiguiente violencia común ha desafiado la capacidad de los nuevos regímenes para establecerse y entregar resultados a la población, no sólo porque afecta directamente la calidad de vida al amenazar su integridad física mucho más que los problemas económicos, sino también porque su atención compete directamente al tipo de instituciones que tuvieron que ser reformadas o creadas para asegurar el éxito de las transiciones; nos referimos al aparato de seguridad del Estado. Al evaluar el apoyo político a las nuevas democracias con relación a los problemas de violencia e inseguridad, el dilema no sólo tiene que ver con la capacidad del nuevo *establishment* para proveer seguridad, sino también, y de forma más importante, tiene que ver con los procedimientos utilizados para garantizar esa seguridad. Este punto es central a la hora de

estudiar el impacto de la violencia y la inseguridad en el apoyo político y la legitimidad del sistema.

En otras palabras, la eficacia de los sistemas para imponer orden y seguridad también puede ser medida por su capacidad para reprimir a los ciudadanos, independientemente de qué tan democráticos o antidemocráticos sean estos procedimientos. Ése es el dilema que genera la violencia. Las personas que han sido afectadas en repetidas ocasiones por violencia común impredecible y repentina y las personas que se preocupan en exceso por su seguridad pueden llegar a desconfiar en la capacidad del régimen postransicional de brindar seguridad; además, pueden ser atraídos por respuestas e instituciones autoritarias o antidemocráticas. En las nuevas democracias, esto se torna crítico, ya que los sistemas políticos están intentando abandonar las pautas autoritarias.

Éste es el caso de los países centroamericanos en situación de posguerra y, específicamente, de Guatemala y El Salvador. Pareciera existir una inconsistencia en el hecho de que las nuevas democracias –o cualquier tipo de régimen híbrido posautoritario– se encuentren, al mismo tiempo, entre las sociedades más violentas del mundo¹⁵. Pero lo que sucede es que ciertas historias de autoritarismo, el contexto internacional y las formas de transición causan esta aparente contradicción; y prueba que aunque las transiciones que tienen como resultado la democracia son únicamente un asunto de acuerdo entre las élites, los prospectos de consolidación democrática sí son un asunto de las instituciones, de su desempeño y de la cultura política de los ciudadanos. Para mantener un proceso de democratización, no es sólo necesario que las instituciones sean democráticas y efectivas; también es importante que las personas estén convencidas de que el nuevo régimen, así como sus instituciones y sus procedimientos, son mejores que el anterior, a pesar de los problemas.

Para comprender lo que representa la violencia y la inseguridad en las sociedades centroamericanas postransicionales, es importante recordar el tipo de transición que experimentaron: una transición en la cual el final de la guerra llevó a la paz política pero no a la paz social, porque la violencia sigue siendo una característica dominante en las relaciones sociales en Centroamérica; una transición en la cual la desmilitarización de las instituciones no necesariamente desmilitarizó a la sociedad, porque los antiguos colaboradores civiles continúan operando y generando violencia y porque, en estos tres países, existen más de 2,5 millones de armas livianas en manos de civiles (Fundación Arias, 2001); y una transición en la cual los regímenes democráticos tienen que coexistir con dosis importantes de procedimientos institucionales autoritarios.

Este trabajo ha abordado el problema de la violencia y de la inseguridad en las nuevas democracias centroamericanas como una amenaza para la democratización, al evaluar los niveles de apoyo político para los actuales regímenes de posguerra. La violencia niega algunos principios básicos de la democracia y debilita el institucionalismo; más

15. Esto también es cierto para las nuevas democracias de otros continentes, por ejemplo, Sudáfrica.

aún, debilita la aceptación, por parte de la población, de la legitimidad de los nuevos gobiernos.

Mucho antes de las guerras, la legitimidad en Centroamérica se basaba en la capacidad de los gobiernos militares y dictatoriales de reprimir. La violencia invadía la vida social, lo cual garantizaba la permanencia del autoritarismo por décadas. Así, en Centroamérica las transiciones de posguerra se orientaron hacia la construcción de gobiernos que no se basaran en la fuerza y en la violencia, sino en el apoyo de la población y en las reglas democráticas. Para la mayor parte de personas, la persistencia de la violencia, en condiciones no predecibles y de inseguridad extrema, desafía la utilidad que le atribuyen a dicho cambio y causa dudas sobre qué forma de vida es mejor: la actual o la que se llevaba previamente bajo un orden autoritario.

Los datos empíricos obtenidos de las encuestas con ciudadanos centroamericanos han comprobado la relación entre violencia y legitimidad, medidas por la victimización, los sentimientos de inseguridad y el apoyo al sistema político. Los ciudadanos que fueron afectados directamente por la violencia común, tienden a expresar menos apoyo al sistema que el resto de la población y las personas más afectadas por el temor y la inseguridad, tendieron a sentirse más desencantados con los regímenes de posguerra en Guatemala y El Salvador. La violencia y la inseguridad son, por lo tanto, predictores clave del debilitamiento del apoyo político en Centroamérica, aunque no son los únicos. Más aún, el impacto del crimen en el apoyo al sistema político es regulado por las siguientes condiciones: edad, educación, ingreso, ideología y violencia política anterior. Estos efectos deben comprenderse bajo las diferentes circunstancias y los contextos regionales.

Pero, la principal diferencia entre estos países resultó ser, precisamente, el nivel de criminalidad medido por la victimización personal. En estos países, donde la violencia es particularmente alta y la inseguridad es generalizada, el impacto en el apoyo al sistema y en la legitimidad es significativo (Guatemala y El Salvador); mientras que en Nicaragua, donde la violencia no alcanza niveles extremos, el impacto en la legitimidad es más bien mínimo. En este país, el problema principal es la generación de desarrollo económico y de bienestar; y éste parece ser el principal obstáculo en términos de estabilidad política.

Ahora bien, dadas estas condiciones de extrema violencia, dos caminos son plausibles. El primero, es que el debilitamiento del apoyo político y la legitimidad lleven a un tipo de reacción, por medio de la cual los ciudadanos impulsen a una parte del sistema a ser más efectivo y responsable en términos de seguridad pública. Como lo señalaba Norris (1999c), la falta de apoyo al sistema no necesariamente lleva a una ruptura de las democracias, pero sí a una conciencia crítica ciudadana que insiste en la satisfacción de sus necesidades y presiona para que el sistema sea más responsable y efectivo dentro del marco del Estado de Derecho. El segundo camino, por otro lado, no es tan optimista como el anterior. En éste, las personas pierden la confianza en la democracia y ésta deja de ser la forma ideal de gobierno porque lo que conocen como «régimen democrático» les ha traído más inseguridad y caos, al tiempo que menos respeto por sus derechos civiles.

En este sentido, existen varias maneras por medio de las cuales el efecto de la violencia en el apoyo político pudiera debilitar los procesos de democratización. Una es que la gente opte por volver a un régimen autoritario sólo porque lo perciba como más capaz de enfrentar los problemas del crimen e inseguridad. Esto puede llevar a dos escenarios distintos: primero, que las personas apoyen o toleren un golpe de Estado para imponer un dictador; o segundo, que los ciudadanos apoyen activamente a un líder autoritario que compita dentro de las reglas de juego democrático y gane. Las actuales condiciones en Latinoamérica, y especialmente en Centroamérica, hacen muy improbable la primera posibilidad, aunque ésta no puede descartarse del todo.

Pero, el segundo camino no parece tan poco probable en América Latina. No necesitamos un golpe de Estado para instalar un gobierno autoritario en la Latinoamérica contemporánea. Fujimori en Perú y Chávez en Venezuela son ejemplos claros. Los actuales regímenes centroamericanos pueden elegir gobiernos que no estén del todo comprometidos con los ideales y procedimientos de la democracia. No necesitamos un ejército para establecer un gobierno autoritario; los regímenes centroamericanos podrían convertirse en autoritarios por la vía electoral. Éste es un riesgo que usualmente se subestima cuando la responsabilidad del autoritarismo se proyecta únicamente al ejército, olvidando que éste sólo fue un actor –muy importante sin duda– dentro de un juego complejo de fuerzas sociales, entre las cuales también se encontraba la sociedad civil.

Los regímenes autoritarios centroamericanos se prolongaron tanto porque la «sociedad civil» cooperaba con ellos. La colaboración subalterna –como la llama Holden (1996)– fue un elemento importante en la aplicación de violencia en Guatemala y El Salvador. Con las excusas del crimen y la inseguridad, estas redes podrían reactivarse para alimentar movimientos incívicos (Payne, 2000), formando partidos o fuerzas políticas que acepten los términos de la democracia para llegar al poder, para luego ignorar al Estado de Derecho. La violencia puede contribuir a un proceso como éste y jugar así un papel importante en el debilitamiento del proceso de democratización.

Pero existe otra forma en que la violencia afecta la cultura política, y por lo tanto, debilita la democratización. Lo anterior no implica el apoyo a un líder o a un manifiesto político de corte autoritario, pero sí el desgaste gradual de la infraestructura institucional. Una falta de legitimidad, tal vez no conlleve a la expulsión de un gobierno civil o al apoyo de liderazgos claramente autoritarios, pero sí a convencer a los ciudadanos para que ignoren las instituciones políticas y resuelvan sus problemas o apliquen las leyes por su propia cuenta; y que, a la larga, consideren al régimen como inútil. Ésta es, creo, la amenaza real más grande y ya presente para las democracias centroamericanas. Los guatemaltecos y salvadoreños están tan acostumbrados a vivir con la violencia que no es difícil reactivar una cultura de violencia que ignore al Estado, el cual ha perdido su legitimidad por esta misma causa. Esto ya ha sucedido en Guatemala, con los linchamientos; y en El Salvador, con las masacres familiares y la extensión de las redes del sicariato. Pero, el peor escenario es aquel en que las instituciones del Estado participan en este proceso de destrucción, al formar grupos de limpieza social, y motivar activamente a las personas a utilizar la violencia para

defenderse¹⁶. En este caso, las instituciones no sólo se tornan inútiles, sino que también contribuyen a debilitar la legitimidad del Estado.

Pero además, la violencia puede convencer a los ciudadanos a que respalden medidas y acciones destinadas a combatir la delincuencia de corte claramente antidemocrático y violatorio de los derechos humanos y los principios fundamentales del Estado de Derecho. En circunstancias de extrema inseguridad, como la que viven Guatemala y El Salvador, los mismos habitantes pueden respaldar medidas gubernamentales, que van desde leyes hasta acciones policiales, que niegan los principios básicos y que permiten el abuso por parte de los operadores de los sistemas de seguridad y de justicia. Éste es el caso, en la actualidad, de los países del norte de Centroamérica; en donde el problema de las pandillas juveniles ha impulsado a los gobiernos de turno de esos países, a formular legislaciones que violan los derechos fundamentales de los niños y de las personas sospechosas de pertenecer a las pandillas.

Al final, el vínculo entre la violencia y la legitimidad es más que un proceso unidireccional. La violencia no sólo debilita el apoyo político al sistema, también una frágil legitimidad puede generar crimen. Los ciudadanos decepcionados del sistema pueden ignorar las leyes y utilizar la violencia en su vida cotidiana, ya que no creen en la capacidad del Estado para resolver problemas, protegerlos y castigar a aquellos que incumplen las reglas; o también pueden promover la remilitarización de las leyes y de la vida pública. Estos procesos implican un círculo vicioso en el que la violencia y el desencanto político arruinan los planes y los prospectos de la democratización.

Ésta es la gran diferencia entre los países de América Latina y los países africanos al sur del Sahara, en los cuales la violencia es incontrolable. Algunos de estos países africanos apenas tienen Estado y es imposible hablar de sistema político en lugares en los que la vida de la gente está controlada por señores de las guerras regionales. América Central, por el contrario, tiene Estados bien formados que se están esforzando por establecer una democracia, pero la violencia común constituye un obstáculo y el talón de Aquiles para este proceso.

Para comprender mejor cómo suceden estos procesos, es necesario considerar otras variables de cultura política. Este trabajo no las ha abordado por motivos de espacio. Sin embargo, un análisis crítico de las condiciones que aún prevalecen en las instituciones centroamericanas y de la cultura política podría llevar a una conclusión pesimista. Desdichadamente, los centroamericanos no parecen estar tan convencidos sobre la democracia como lo estaban justo después de la transición. Datos del Latinobarómetro reflejan que en el año 2002, guatemaltecos y salvadoreños expresaban menor preferencia por un régimen democrático que en 1996; sólo en Nicaragua se ha observado un aumento en el apoyo popular por la democracia como sistema de gobierno. Adicionalmente, una encuesta de medición de la cultura política en Guatemala en el año 2001, mostró que la aceptación de los golpes de Estado en la población había aumentado ligeramente

16. Esto ya ha pasado en El Salvador, en donde la Asamblea aprobó en 1999 una ley que le permite a los ciudadanos portar rifles de guerra para luchar contra el crimen, porque el Estado «ya no puede proteger a la “población honesta”» (PNUD, 2003).

a un 47%; también, que un 82% de la población prefería el orden a las libertades y derechos humanos, y que las personas con sentimientos de inseguridad tendían a mostrar menos apoyo por los valores democráticos (Azpuru, 2002). En El Salvador, la misma encuesta de donde se extrae el análisis de este trabajo generó los siguientes resultados: 55% de los salvadoreños apoyarían, en condiciones de delincuencia generalizada, un golpe de Estado; más aún, un análisis realizado por Seligson *et al.* (2001) reveló que la inseguridad es un predictor importante en el apoyo a regímenes autoritarios en El Salvador.

Sin embargo, los datos y los hallazgos no necesariamente llevan a concluir que los ciudadanos centroamericanos se están preparando para derrocar a sus actuales regímenes. Tampoco implican que habrá un golpe de Estado liderado por los militares en Centroamérica. Más bien, estos hallazgos sugieren que la amenaza real para las democracias centroamericanas es el lento desgaste de la legitimidad, el cual puede hacer que los ciudadanos indiferentes se retiren de las instituciones públicas y pierden el respeto por el Estado de Derecho. Es importante comprender que el hecho de tener una cultura política en la que las personas se encuentran «desencantadas» con el sistema no implica la ruptura inmediata de la democracia; pero sí sugiere que podrían disminuirse los prospectos de supervivencia de la misma al reducir los derechos políticos de los ciudadanos, al negar sus libertades civiles y al ignorar el Estado de Derecho que rige a todos de manera igualitaria. En este caso, ya no estamos hablando de democratización, pero sí de una especie de «autoritarización» en un contexto de condiciones formales democráticas.

Al final estos hallazgos dan pie para aseverar que una política de seguridad pública efectiva no sólo es necesaria para establecer el orden, mejorar las condiciones de salud, proteger los derechos humanos o garantizar la inversión y el desarrollo; sino también para solidificar los procesos de democratización y disipar los fantasmas del autoritarismo en Centroamérica.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- ALMOND, Gabriel y VERBA, Sydney. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press, 1963.
- ARRIAGADA, Irma. Seguridad ciudadana y violencia en América Latina. En CARRIÓN, Fernando (ed.). *Seguridad ciudadana, ¿espejismo o realidad?* Quito: FLACSO Ecuador-OPS/OMS, 2002.
- AZPURU, Dinorah. *La cultura democrática de los guatemaltecos en el nuevo siglo. V estudio*. Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales, 2002.
- BALOYRA-HERP, Enrique. Elections, Civil War and Transition in El Salvador, 1982-1994: A Preliminary Evaluation. En SELIGSON, Mitchell y BOOTH, John (eds.). *Elections and Democracy in Central America Revisited*. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1995.
- BUVINIC, Mayra; MORRISON, Andrew y SHIFTER, Michael. *Violence in Latin America and the Caribbean: A Framework for Action*. Washington, D.C.: Inter-American Development Bank, 1999.

- CALL, Charles T. War transitions and the new civilian security in Latin America. *Comparative Politics*, 2002, vol. 35, n° 1, pp. 1-20.
- Crime and Peace: Why Successful Peace Processes Produce the World's Most Violent Countries. Paper Presented at the *Annual Conference of the International Studies Association (ISA)*. Washington, D.C., 1999, February.
- CARDENAL, Ana Sofía y MARTÍ I PUIG, Salvador. *América Central, las democracias inciertas*. Barcelona: Editorial Tecnos y Universitat Autònoma de Barcelona, 1998.
- CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES (CIEN). *Estudio sobre la magnitud y el costo de la violencia en Guatemala*. Guatemala: CIEN, 2002.
- COMISIÓN DE LA VERDAD PARA EL SALVADOR. De la locura a la esperanza. Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador. [Manuscript], 1993.
- COMMISSION FOR HISTORICAL CLARIFICATION. *Guatemala, Memory of Silence. Report of the Commission for Historical Clarification*, 1996. [Puede encontrarse en: <http://shr.aas.org/guatemala/ceh/report/english/toc.html>].
- CORBACHO, Ana y DAVOODI, Hamid. Expenditure Issues and Governance in Central America. *Working Paper*, n.º 02/87. Washington, D.C.: International Monetary Fund, 2002, n° 02/87.
- CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. Executive-Legislative Relations and the Institutionalisation of Democracy. En SIEDER, Rachel (ed.). *Central America: Fragile Transition*. London: Macmillan Press, 1996.
- CRUZ, José Miguel. The Peace Accords Ten Years Later. A Citizens' Perspective. En ARNSON, Cynthia J. *El Salvador's Democratic Transition. Ten Years After the Peace Accords*. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center for International Scholars, Latin American Program, 2003.
- *¿Elecciones para qué? El impacto de la cultura política salvadoreña en el ciclo electoral 1999-2000*. San Salvador: FLACSO, 2000a.
- Violencia, democracia y cultura política. *Nueva Sociedad*, 2000b, vol. 167, pp. 132-146.
- CRUZ, José Miguel y GONZÁLEZ, Luis Armando. Magnitud de la violencia en El Salvador. *Estudios Centroamericanos*, 1997, vol. 588, pp. 953-966.
- CRUZ, José Miguel; TRIGUEROS, Álvaro y GONZÁLEZ, Francisco. *El crimen violento en El Salvador. Factores sociales y económicos asociados*. San Salvador: Instituto Universitario de Opinión Pública y el Banco Mundial, 2000.
- CUADRA, Elvira. Nuevas dimensiones de la seguridad ciudadana en Nicaragua. En CARRIÓN, Fernando (ed.). *Seguridad ciudadana, ¿espejismo o realidad?* Quito: FLACSO Ecuador-OPS/OMS, 2002.
- DE LEÓN, Carmen Rosa; OGALDES, Claudinne y LÓPEZ, Claudia. Guatemala: Diagnóstico de la problemática posconflicto. En *Violencia social en Centroamérica*. Managua: CRIES, 1999.
- DE MESQUITA NETO, Paulo. Crime, Violence, and Democracy in Latin America. Paper presented in the *Conference Integration in the Americas*. Albuquerque, New Mexico, April 5, 2002.
- DIAMOND, Larry. Introduction: Political Culture and Democracy. En DIAMOND, Larry (ed.). *Political culture and democracy in Developing Countries*. London: Lynne Rienner Publishers, 1993.
- DUNKERLEY, James y SIEDER, Rachel. The Military: the Challenges of Transitions. En SIEDER, Rachel (ed.). *Central America: Fragile Transition*. London: Macmillan Press, 1996.
- FUNDACIÓN ARIAS. *El arsenal invisible. Armas livianas y seguridad ciudadana en la posguerra centroamericana*. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2001.

- GARRETÓN, Manuel Antonio y NEWMAN, Edward. Introduction. En GARRETÓN, Manuel Antonio y NEWMAN, Edward (eds.). *Democracy in Latin America. (Re)Constructing Political Society*. New York: United Nations University Press, 2001.
- GAVIRIA, Alejandro y PAGÉS, Carmen. Patterns of Crime Victimization in Latin America. Washington, D.C.: Interamerican Development Bank, 1999, n° 408.
- GONZÁLEZ, Secundino. La democracia en Nicaragua: un balance pesimista. En BOTELLA, Joan y SANAHUJA, Joseph (eds.). *Centroamérica después de la crisis*. Barcelona: ICPS, 1998.
- HOLDEN, Robert. Constructing the Limits of State Violence in Central America: Towards a New Research Agenda. *Journal of Latin American Studies*, 1996, vol. 28, n° 2, pp. 435-459.
- KARL, Terry Lynn. The hybrid regimes of Central America. *Journal of Democracy*, 1995, vol. 6, n° 3, pp. 72-86.
- Dilemmas of Democratization in Latin America. *Comparative Politics*, 1990, vol. 23, pp. 1-21.
- KARL, Terry Lynn y SCHMITTER, Philippe. Modes of Transitions in Latin America, Southern and Eastern Europe. *International Social Science Journal*, 1991, vol. 128, pp. 269-284.
- KRUG, Etienne H.; DAHLBERG, Linda L.; MERCY, James A.; ZWI, Anthony B. y LOZANO, Rafael (eds.). *World Report on Violence and Health*. Geneva: World Health Organization Publications, 2002.
- LINZ, Juan J.; LIPSET, Seymour M. y POOL, A. B. (no date). Social Conditions for Democracy in Latin America: Latin America Barometer Survey Analysis. En UNDP (ed.). *Governance & Democratic Development in Latin America and the Caribbean*. New York: United Nations Development Program.
- LINZ, Juan y STEPAN, Alfred. Hacia la consolidación democrática. *La Política*, 1996, vol. 2, pp. 29-49.
- LIPSET, Seymour M. The Social Requisites of Democracy Revisited. *American Sociological Review*, 1994, vol. 59, n° 1, pp. 1-22.
- MAILHOLD, Günther y CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. Democracia y ciudadanía en Centroamérica. En CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo; MAILHOLD, Günther y KURTENBACH, Sabine (comps.). *Pasos hacia una nueva convivencia: democracia y participación en Centroamérica*. San Salvador: Fundaungo, 2001.
- MÉNDEZ, Juan. Problems of Lawless Violence: Introduction. En MÉNDEZ, Juan; O'DONNELL, Guillermo y PINHEIRO, Paulo Sergio (eds.). *The (Un)Rule of Law & the Underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999.
- MÉNDEZ, Juan; O'DONNELL, Guillermo y PINHEIRO, Paulo Sergio (eds.). *The (Un)Rule of Law & the Underprivileged in Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1999.
- MORRISON, Andrew y ORLANDO, María Beatriz. Social and Economic Costs of Domestic Violence: Chile and Nicaragua. En MORRISON, Andrew y BIEHL, Maria Loreto (eds.). *Too close to home: Domestic Violence in the Americas*. Washington, D.C.: IADB, 1999.
- MOSER, Caroline y WINTON, Ailsa. Violence in the Central American Region. Towards an Integrated Framework of Violence Reduction. *Cuaderno de Trabajo*, 2002, n° 171. London: Overseas Development Institute.
- NORRIS, Pippa. Introduction: The Growth of Critical Citizens? En NORRIS, Pippa (ed.). *Critical Citizens. Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999a.
- Institutional Explanations for Political Support. En NORRIS, Pippa (ed.). *Critical Citizens. Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999b.

- Conclusions: The Growth of Critical Citizens and Its Consequences. En NORRIS, Pippa (ed.). *Critical Citizens. Global Support for Democratic Government*. Oxford: Oxford University Press, 1999c.
- PAYNE, Leigh. *Uncivil Movements. The Armed Right Wing and Democracy in Latin America*. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2000.
- PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). *Armas de fuego y violencia*. San Salvador: PNUD El Salvador, 2003.
- *Indicadores sobre violencia en El Salvador*. San Salvador: PNUD El Salvador, 2002.
- PRZEWORSKI, Adam; ÁLVAREZ, Michael; CHEIBUB, José Antonio y LIMONGI, Fernando. What makes democracies endure? *Journal of Democracy*, 1996, vol. 7, n° 1, pp. 39-55.
- RANUM, Elin Cecilie. *Violent Crime in Post-War El Salvador: An Obstacle to the Consolidation of Democracy?* Trondheim: Historisk Institutt, NTNU, 2002.
- RODRÍGUEZ, Mario y DE LEÓN, Mayda. Diagnóstico sobre la situación actual de las armas ligeras y la violencia en Guatemala. En *El arsenal invisible*. San José: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, 2000.
- RUSTOW, Dankwart. Transitions to democracy: Toward a Dynamic Model. En ANDERSON, Lisa (comp.). *Transitions to Democracy*. New York: Columbia University Press, 1999.
- SALDOMANDO, Ángel. Nicaragua: los rostros de la violencia. En *Violencia social en Centroamérica*. Managua: CRIES, 1999.
- SANTACRUZ, María y CONCHA-EASTMAN, Alberto. *Barrio adentro. La solidaridad violenta de las pandillas*. San Salvador: IUDOP-UCA, 2000.
- SCHIRMER, Jennifer. *The Guatemalan Military Project. A Violence Called Democracy*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1998.
- SELIGSON, Mitchell A. The Impact of Corruption on Regime Legitimacy: A Comparative Study of Four Latin American Countries. *The Journal of Politics*, 2002, vol. 64, n° 2, pp. 408-433.
- Toward a Model of Democratic Stability: Political Culture in Central America. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 2000, vol. 11, n° 2, pp. 1-22.
- SELIGSON, Mitchell A.; CRUZ, José Miguel y CÓRDOVA MACÍAS, Ricardo. *Auditoría de la democracia. El Salvador 1999*. San Salvador: Fundaungo, IUDOP-UCA y University of Pittsburg, 2000.
- SIEDER, Rachel. War, Peace, and Memory Politics in Central America. En BARAHONA DE BRITO, Alejandra; GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, Carmen y AGUILAR, Paloma (eds.). *The Politics of Memory. Transitional Justice in Democratization Societies*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- STANLEY, William. *The Protection Racket State. Elite Politics, Military Extortion and Civil War in El Salvador*. Philadelphia: Temple University Press, 1996.
- TORRES-RIVAS, Edelberto. La pacificación de la guerra. *Foreign Affairs en Español*, 2001a, vol. 1, n° 2, pp. 15-19.
- Foundations: Central America. En GARRETÓN, Manuel Antonio y NEWMAN, Edward (eds.). *Democracy in Latin America. (Re)Constructing Political Society*. New York: United Nations University Press, 2001b.
- VILAS, Carlos. La democratización en los escenarios posrevolucionarios de Centroamérica: antecedentes y perspectivas. En CARDENAL, Ana Sofía y MARTÍ I PUIG, Salvador (comps.). *América Central, las democracias inciertas*. Barcelona: Editorial Tecnos y Universitat Autònoma de Barcelona, 1998.
- VILLALOBOS, Joaquín. Perspectivas de victoria y proyecto revolucionario. *Estudios Centroamericanos*, 1989, vol. 483-484, pp. 11-51.

ANEXOS

TABLA A
 ÍTEMS Y VARIABLES EN LAS ENCUESTAS SALVADOREÑA Y NICARAGÜENSE

Variable	Indicador	Ítem en cuestionario
<i>Variable independiente</i>		
Crimen	Victimización producida por crimen	¿Ha sido usted víctima de una agresión o de cualquier tipo de hecho de violencia en el último año?
Inseguridad	Sentimientos de inseguridad	Con relación al vecindario donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un robo o asalto, ¿qué tan seguro se siente usted: muy seguro, algo seguro, algo inseguro o muy inseguro?
Violencia política	Victimización durante la guerra	¿Perdió usted algún miembro de su familia o a algún familiar cercano como producto del pasado conflicto armado?
<i>Variable dependiente</i>		
Legitimidad	Apoyo político	¿Hasta qué punto piensa usted que las cortes garantizan un juicio justo? ¿Hasta qué punto siente usted respeto por las instituciones políticas del país? ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político de su país? ¿Hasta qué punto cree usted que se debe apoyar al sistema político de su país? ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien protegidos por el sistema político de su país?

TABLA B
 ÍTEMS Y VARIABLES EN LA ENCUESTA DE GUATEMALA

Variable	Indicador	Ítem en cuestionario
<i>Variable independiente</i>		
Crimen	Victimización producida por crimen	¿Ha sido usted víctima de una agresión o de cualquier tipo de hecho de violencia en el último año?
Inseguridad	Sentimientos de inseguridad	¿Qué tan seguro se siente usted de caminar de noche en su vecindario: nada inseguro, un poco inseguro, algo inseguro o muy inseguro?
Violencia política	Victimización durante la guerra	¿Perdió usted algún miembro de su familia o a algún familiar cercano como producto del pasado conflicto armado?
<i>Variable dependiente</i>		
Legitimidad	Apoyo político	¿Qué tanta confianza tiene usted en los tribunales de justicia? ¿Cuánta confianza tiene usted en los funcionarios públicos? ¿Qué tan orgulloso se siente usted del sistema de gobierno de Guatemala?

JOSÉ MIGUEL CRUZ
 VIOLENCIA Y DEMOCRATIZACIÓN EN CENTROAMÉRICA:
 EL IMPACTO DEL CRIMEN EN LA LEGITIMIDAD DE LOS REGÍMENES DE POSGUERRA

TABLA C
 CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS ESCALAS DE LA BASE DE DATOS DE GUATEMALA

	Escala		Media	Desviación Típica
	Mínimo	Máximo		
<i>Variable dependiente:</i>				
Apoyo político	0 = menor	10 = mayor	4,30	2,3
<i>Variables independientes</i>				
Género	1 = masculino	2 = femenino	1,52	0,5
Edad	18	90	43,2	15,9
Educación	0 = ninguna	4 = universidad	1,32	1,1
Ideología	1 = izquierda	10 = derecha	5,54	2,6
Víctima de violencia política	0 = no	1 = sí	0,16	0,3
Víctima de crimen	0 = no	1 = sí	0,22	0,4
Inseguridad	1 = muy seguro	4 = muy inseguro	2,52	1,1

TABLA D
 CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS ESCALAS DE LA BASE DE DATOS DE EL SALVADOR

	Escala		Media	Desviación Típica
	Mínimo	Máximo		
<i>Variable dependiente</i>				
Apoyo político	0 = menor	10 = mayor	5,72	2,3
<i>Variables dependientes</i>				
Género	1 = masculino	2 = femenino	1,52	0,5
Edad	18	94	37,9	16,1
Educación	0 = ninguna	18 = universidad	8,05	5,3
Ingreso familiar	0 = ninguno	7 = >US\$ 700	2,65	1,8
Empleo	0 = no	1 = sí	0,58	0,4
Ideología	1 = izquierda	10 = derecha	5,93	2,7
Víctima de violencia política	0 = no	1 = sí	0,36	0,48
Víctima de crimen	0 = no	1 = sí	0,22	0,4
Inseguridad	1 = muy seguro	4 = muy inseguro	2,37	1,0

TABLA E
 CODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES Y LAS ESCALAS DE LA BASE DE DATOS DE NICARAGUA

	Mínimo	Escala Máximo	Media	Desviación Típica
<i>Variable dependiente</i>				
Apoyo político	0 = menor	10 = mayor	5,07	2,2
<i>Variables independientes</i>				
Género	1 = masculino	2 = femenino	1,50	0,5
Edad	16	95	36,1	14,8
Educación	0 = ninguna	19 = posgrado univ.	7,27	4,8
Ingreso familiar	0 = ninguno	10 = > 4.000 córdobas	4,55	2,4
Empleo	0 = no	1 = sí	0,50	0,5
Ideología	1 = izquierda	10 = derecha	5,44	2,6
Víctima de crimen	0 = no	1 = sí	0,14	0,3
Inseguridad	1 = muy seguro	4 = muy inseguro	2,25	1,0